

EL DIFÍCIL REINTENTO DE UN PROYECTO DE PAÍS: LA SOCIEDAD CHILENA A COMENZOS DE SIGLO*.

Manuel Antonio Garretón M.

Al comenzar el nuevo siglo y a menos de dos años de inaugurado el tercer gobierno democrático después de los diecisiete años de dictadura militar encabezada por Pinochet, pueden apreciarse diversas miradas sobre la sociedad chilena, ligadas sin duda a posturas ideológico-políticas.

Para unos, Chile ya ha entrado en una nueva época, la del siglo XXI, definida por la democracia, la economía de mercado y la globalización. Sin embargo, hay quienes consideran que la entrada a la nueva época se ha hecho en forma tardía y sin la fuerza suficiente. Por ello, habría que remover las trabas que aún atan el país a la sociedad del siglo XX y que impiden a la globalización y a la economía de mercado su plena realización. Quienes así ven las cosas, especialmente sectores empresariales y ligados a la derecha política y antiguos sostenedores del régimen militar, es decir opositores a los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, quisieran que la política, y por lo tanto, el Estado y los gobiernos, se pusieran definitivamente al servicio de este proceso, que juzgan ha ido quedando estancado.

En la atmósfera intelectual y de opinión alrededor de la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición de centro izquierda que gobierna Chile desde Marzo de 1990, coexisten dos estados de ánimo. Unos satisfechos con lo logrado hasta ahora, ven en la crisis económica externa que se arrastra desde el 97 sin que se haya producido una reactivación consistente, el único freno al crecimiento y desarrollo del país. Otros sienten que el problema es más de fondo y tendría que ver con el agotamiento del proyecto de la coalición, que, pese a su éxito no habría logrado superar enteramente las herencias del pinochetismo ni en el plano institucional ni en el del modelo socio-económico, lo que se expresaría tanto en la dificultad de una agenda renovada de gobierno, pese a reconocerse el estilo vigoroso del liderazgo del presidente Lagos, como en el distanciamiento de la política, especialmente entre los más jóvenes, y en el crecimiento electoral de la derecha que podría significarle el acceso al gobierno en las elecciones presidenciales de 1995, dados los buenos resultados obtenidos por su líder, Joaquín Lavín, en las elecciones de 1999.

Las posturas más críticas de izquierda fuera de la Concertación, especialmente ligadas al Partido Comunista o a visiones menos orgánicas de tipo alternativista, sostienen que la sociedad chilena es simplemente un reflejo del modelo neo-liberal y que los gobiernos de la Concertación son sus simples administradores, no habiéndose reemplazado la herencia del régimen pinochetista sino en lo que concierne a las libertades públicas y la vigencia de los derechos humanos, aunque manteniendo la impunidad de los crímenes cometidos bajo dicho régimen.

En el campo intelectual, al examinar las grandes transformaciones ocurridas en las últimas décadas y proyectarlas hacia el futuro, aparecen dos grandes tendencias, a veces relacionadas con estas visiones, a veces apoyadas por investigaciones y estudios serios, y otras materializando más los estados de ánimo e ideologías de sus autores. La primera, enfatiza el aspecto crítico apuntando a la globalidad del proceso en sus causas económicas, políticas o culturales. La segunda de tipo apologético nos muestra una sociedad modernizada y democratizada, en la que los problemas que pudieran existir se deben precisamente al éxito alcanzado por estos dos procesos socio-políticos.¹,

Todas estas visiones giran en torno a la pregunta por la naturaleza de la sociedad en que estamos, es decir, si ella es la misma de siempre o si es el resultado de una modernización y democratización exitosas que sólo deja como problemas pendientes algunas cuestiones puntuales no resueltas, o si ella es el resultado ambiguo de procesos que no han superado las grandes cuestiones del pasado y donde lo que está en juego es el modelo socio-económico y político-cultural.

* Retomamos en este trabajo algunas de las ideas desarrolladas en el capítulo 6 de nuestro libro **La sociedad en que vivi(re)mos. Introducción sociológica al cambio de siglo** (Ediciones LOM, Santiago, 2000) y en la investigación realizada junto con Malva Espinosa, **Tendencias de cambio en la matriz socio-política chilena, Una aproximación empírica** (Informe Fondecyt, Santiago, 1995). La información básica del presente trabajo fue recogida y analizada por Andrea Castro.

¹. Sobre la primera, T. Moulián, **Chile actual: anatomía de un mito** (LOM-Arcis 1997); A. Jocelyn Holt. **El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica** (Planeta, Santiago, 1997) y **El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar** (Planeta, 1998); G. Salazar **Historia de Chile contemporáneo** (2 tomos, LOM 2000). Sobre la segunda E. Tironi, **La irrupción de las masas y el malestar de las élites** (Grijalbo, Santiago, 2000); E. Boeninger, **Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad** (Editorial Andrés Bello, 1997). En el mundo intelectual de la derecha, sobresalen los estudios económicos que apuntan a la insuficiencia de las políticas económicas de los gobiernos de la Concertación respecto del legado de la transformación operada por el régimen militar. Ver F.Larraín y R Vergara, eds **La transformación económica de Chile**. (CEP, Santiago 2000)

Detrás de esta pregunta está la interrogante más fundamental sobre si en el mundo globalizado de hoy sigue siendo pertinente plantearse la idea de un proyecto nacional y de si es posible la existencia de países que no cuenten con ello.

Y por eso comenzaremos revisando la suerte de la idea o proyecto dominante para Chile en el siglo XX, lo que implica el análisis de las relaciones entre economía, política, cultura y sociedad y su ruptura. Ello nos permitirá luego un balance de los procesos de democratización política y las transformaciones estructurales que nos dejan planteadas las nuevas relaciones entre esas cuatro dimensiones y los desafíos para el futuro de un proyecto societal.

EL CHILE DEL SIGLO XX. UNA INTRODUCCION.

El modelo socio-económico y político cultural

El modelo societal chileno o matriz socio-política predominante en el siglo XX puede definirse como estatal-democrático,-nacional-popular y político-partidario y podría caracterizarse por la imbricación entre política y sociedad civil, incluida la economía, con un rol preponderante y articulador del sistema de actores políticos o sistema partidario en torno del Estado.

Se trataba, así, de la afirmación de una identidad de una comunidad nacional que se va haciendo con el trabajo y las luchas de su gente, de su pueblo, y que el modo cómo ello se construye se inspira en principios e instituciones que llamamos democráticos. Esto último significa el esfuerzo de incorporación social amplia y la búsqueda de resolución de conflictos en el marco institucional y no por la fuerza o la coerción y exclusión.

En el plano político, que fue siempre la principal expresión de la idea nacional-estatal-democrático-popular-partidaria, están la Constitución del 25 y una institucionalidad política que buscaba el respeto a la ley y a las libertades, al mismo tiempo que la responsabilidad del Estado y del servicio público. También las leyes sociales de la época, el voto universal y la incorporación de masas a la política desde 1920². En esta idea radicó el eje de los proyectos del Partido Radical y los partidos de la Izquierda en el Frente Popular con la integración de clases medias y sectores populares, de la Patria Joven y la Revolución en Libertad del proyecto demócratacristiano de los sesenta y de la Vía

² La Constitución de 1925 plasma en la Carta Magna normas que dieron cuenta de la modernización que se inició después de la guerra del Pacífico en 1879. El nuevo estatuto jurídico le otorgó al Estado un papel conductor en el desarrollo, lo que le dio a los partidos políticos un rol determinante en el sistema político, y reflejó las nuevas corrientes liberales y socializantes del siglo XX, que ponían énfasis en los derechos sociales. La cuestión social, reemplazó a las luchas doctrinarias del siglo XIX, respondiendo a conflictos derivados de la industrialización, la migración campo-ciudad y la eclosión urbana. Bajo el gobierno de don Arturo Alessandri (1920-1925) se dictan leyes sociales que posteriormente serán la base del Código del Trabajo aprobado en 1931. En el plano político, la nueva Constitución introducía el voto proporcional para reflejar las tendencias políticas diversificadas que ya estaban presentes en la sociedad. En cuanto a la ampliación de la ciudadanía, la mujer obtiene el derecho a voto sólo en 1949, a nivel municipal, y en 1952 para las elecciones presidenciales. La reforma del sistema electoral más importante, orientada a eliminar la manipulación de la votación, se hace al final de la década del cincuenta bajo el gobierno de Ibáñez y el voto a los analfabetos se consagra a inicios de los sesenta.

Chilena al Socialismo encabezada por la Unidad Popular y el presidente Allende entre 1970 y 1973³. Mucho de ello, aunque en condiciones totalmente diversas, estará presente en las luchas contra la dictadura militar y, más adelante, en la alianza de centro e izquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia, que gobierna el país desde el retorno a la democracia después de la dictadura pinochetista.

En el plano socio-económico, este proyecto se expresó en la industrialización a través del rol dirigente del Estado, la educación pública gratuita y las Universidades de cobertura nacional, la reforma agraria, y más adelante las nacionalizaciones, el Servicio Nacional de Salud, entre muchos otros hitos significativos. Incluso, en una época ya pasada, el servicio militar cumplió hasta un cierto momento un rol de integración nacional,

Esto significa que, independientemente de la orientación política o ideológica de los gobiernos que se sucedieron por más de cuarenta años, había un cierto consenso político y social básico en torno al esfuerzo industrializador y al papel del Estado como eje fundamental del desarrollo, sin que ello implique que no hubiera importantes discrepancias desde el mundo económico y político de la derecha y divergencias sobre las orientaciones sociales en el campo mesocrático-popular o de centro-izquierda. De hecho, la mayor parte de los gobiernos pusieron algún nivel de énfasis en la inversión pública, el pleno empleo y la redistribución⁴.

³ Los gobiernos que abarca el periodo considerado y sus orientaciones políticas de centro, derecha e izquierda son los siguientes: Pedro Aguirre Cerda (1938-1942), Radical de centro, gobierna con una coalición de partidos de izquierda de carácter popular (socialistas, comunistas, etc). Juan Antonio Ríos (1942-1946), Radical de centro, gobierna con una coalición similar. Gabriel González Videla (1946-1952), Radical, es elegido con el apoyo de la izquierda hasta que decreta una ley que pone al margen de la legalidad al Partido Comunista. Carlos Ibañez del Campo (1952-1959), independiente, ex militar y dictador al final de los veinte, es elegido con el apoyo de la izquierda y con un programa populista que luego abandona, intentando destruir el sistema de partidos. Jorge Alessandri (1959-1964), empresario independiente, es elegido y gobierna con el apoyo de la derecha y, más adelante, también con el del Partido Radical. Eduardo Frei Montalva (1964-1970), Demócrata Cristiano, gobierno reformista de centro, gobierna con su propio partido. Salvador Allende (1970-1973), gobierno reformista de orientación socialista, conformado por una coalición de partidos de izquierda, básicamente Socialista y Comunista, con otros partidos menores, denominada Unidad Popular. Es derrocado por un golpe de Estado, liderado por el General Augusto Pinochet, que constituye una dictadura militar hasta 1990.

⁴ Sobre las relaciones predominantes entre economía, política y sociedad en el Chile del siglo XX, ver J. Ahumada, **En vez de la miseria**, Editorial del Pacífico, 1958; A. Pinto, **Chile, un caso de desarrollo frustrado**.(Editorial Universidad de Santiago, edición de 1996), Mario Góngora, **Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX**. Editorial Universitaria, Santiago 1986; Tomás Moulian, **Desarrollo Político en Chile**. En: Colección Estudios CIEPLAN N°1 8, Santiago, Julio de 1982; M: A. Garretón and M. Espinosa, **Tendencias de cambio**

Entre 1965 y 1973, se configuran las tendencias reformistas cuya principal plataforma es la integración creciente de los sectores populares más pobres de los mundos agrarios y urbanos, en el plano económico, político y social. Bajo el gobierno de Eduardo Frei 1965-1970, las reformas adquirieron un carácter más gradual, en tanto bajo el gobierno de Allende, la estrategia fue de cambios radicales, fundamentalmente en el plano de la organización económica y social, porque exceptuando la ampliación de la ciudadanía electoral, no se plantearon reformas al sistema político-institucional en ninguno de los dos gobiernos reformistas.

Las principales reformas en el campo económico (reforma agraria, nacionalización del cobre) estaban relacionadas con el sistema de propiedad de sectores considerados estratégicos en el desarrollo. A su vez, las reformas de ampliación democrática estuvieron centradas en la organización social y la incorporación a los mecanismos electorales de campesinos, jóvenes y analfabetos. Bajo estos gobiernos se dictó la ley de sindicalización campesina, que ayuda a la incorporación a la vida política al sector rural secularmente postergado de sus derechos sociales y políticos, se extendió el derecho a voto a los analfabetos y se rebajó de 21 a 18 años la edad para ejercer el sufragio. Durante ambos gobiernos y a pesar de la progresiva polarización y de los conflictos sociales y políticos en creciente aumento motivados por las políticas de reforma emprendidas, sin que siempre hubiera respaldo mayoritario para los gobiernos, hay un absoluto respeto a la Constitución y al ejercicio regular de las instituciones democráticas y plena vigencia de las libertades públicas y del Estado de Derecho. El espectro político sufre un doble proceso de ampliación, por un lado, con la gestación de partidos de izquierda escindidos de la Democracia Cristiana, y de polarización y rigidización, por otro, caracterizado por la unificación partidaria de la derecha en un partido de corte más nacionalista y autoritario (Partido Nacional), la autonomización del centro más ideológico y con proyecto alternativo propio (Democracia Cristiana), y la agrupación de la izquierda en torno a la matriz marxista leninista y un proyecto de corte más radicalmente

en la matriz socio-política chilena, op. cit. .Sobre las políticas económicas específicamente R.Ffrench-Davis: **Políticas Económicas en Chile 1957-1970**, (CIEPLAN-Universidad Católica de Chile, Santiago 1973). P. Meller, **Un siglo de economía política chilena. 1880-1990**. (Editorial .A Bello 1996);.R. Ffrench-Davis, **Desarrollo económico, inestabilidad y desequilibrios políticos en Chile. 1950-1989** (Estudios CIEPLAN N° 28 , 1990). Ernesto Tironi, **Evolución Socioeconómica de Chile antes del Neoliberalismo. Una reinterpretacion**.(Documento de Trabajo N1 19, CED, Santiago, Octubre de 1984).

anticapitalista

Durante todo el período analizado, el Estado jugó un papel central no sólo en la orientación del desarrollo y el "ordenamiento" de los actores económicos y sociales bajo un modelo desarrollista común, sino que además, fue el articulador social y político por excelencia⁵. Los gobiernos de turno de derecha, centro o izquierda mantuvieron políticas económicas de protección a la industria nacional, subsidio a los agentes económicos (como las bajas tasas de interés al crédito) y de redistribución del ingreso sistemática y progresiva⁶, asumiendo, por una parte, funciones en la regulación de los salarios y los precios y, por otra, aumentando las prestaciones sociales de Educación, Salud y Vivienda en el presupuesto fiscal. De hecho la inversión social es incluso reconocida hoy, como uno de los efectos duraderos del desarrollismo y además se le reconoce como una base sin la cual no habría sido posible el crecimiento que exhibe la economía chilena actualmente.

Los resultados económicos del período analizado muestran tendencias moderadas pero sostenidas de crecimiento, bajo desempleo y tasas razonables de inversión, aunque con tasas altas de inflación⁷, lo que indica el carácter más político del derrumbe democrático de 1973

La centralidad política se encuentra también en el mundo cultural, sin negar la autonomía propia de

⁵. Respecto de la participación del Estado en la economía nacional, el porcentaje del gasto público sobre el PIB era en 1972, al fin de la matriz nacional-popular de 50%. Ver Christian Suárez, **Reseña del Gobierno de Chile**. (En Selección de Documentos Clave. CLAD, Caracas, Venezuela, Vol. 7, N°12, 1990).

⁶ A finales de los sesenta, Chile presentaba la segunda menor desigualdad en la distribución de ingresos dentro de América Latina. A mediados de los noventa, ocupaba el segundo lugar de mayor desigualdad. En 1969 el 40% más pobre de la población representaba el 19.4% del gasto, en tanto el 20% más rico el 44.5%. Compárese esto con el 12.6% y el 54.9%, respectivamente, tras quince años de régimen militar en 1988. Ver R. French Davis, **Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile** (Dolmen, Santiago, 1999)

⁷ Por ejemplo, el PGB tuvo un crecimiento moderado pero sostenido en el período 1952 hasta 1973 alcanzando un promedio de 3.8%. La tasa de desempleo y crecimiento de la ocupación también muestran una evolución favorable con un promedio de desocupación de 5.8% entre 1959 y 1973. En tanto el crecimiento de la ocupación en el mismo período fue de 4%. Entre 1960 y 1973 la tasa de inversión, se mantiene alrededor del 19.3%, cayendo notablemente hacia fines del período 70-73 de 20.4% a 14.7%. Las cifras promedio de inflación, - la que fue sobretodo la expresión económica del fenómeno político de compromiso entre diversos actores sociales, mediados por su representación partidaria, por distribuir el producto social sin alterar su posición relativa- fueron, por período presidencial Ibañez, 43%. Alessandri, 26%. Frei 28%. Allende, 144%, tasa ésta última que no puede analizarse fuera de la crisis política y económica desatada al final del período. Ver Ernesto Tironi, **Evolución socio-económica...** op.cit.

esta dimensión, del modelo societal chileno predominante en el siglo XX. Es cierto que estamos en presencia de orientaciones culturales que valorizan la educación, la igualdad y solidaridad, los proyectos colectivos de nación, el carácter mesocrático, pero donde no están ausentes componentes meritocráticos y también clasistas y oligárquicos provenientes de la presencia de la cultura del campo o la hacienda. Pero, la identidad chilena y el proceso de construcción de identidades colectivas en el interior de ella tuvo como lugar o eje central a la política. Esta fue mucho más que los procesos que definen el gobierno y sus decisiones. Fue el modo particular de constituirse como sociedad, una forma de vida social. La política fue el principal lugar de respuesta a las preguntas por el sentido y las instituciones el principal instrumento de esas respuestas, configurando una perpetua ambigüedad o hipocresía entre la aceptación de la norma y la duda de su valor intrínseco. Con la particularidad, además, que se trataba de una política de carácter más partidario que personalizada o populista como en otros países de América Latina. La existencia de un espectro ideológico-partidario completo, antes que se completara la participación de masas en la vida social y política, le dio a esta centralidad de la política un carácter altamente ideológico, que se radicalizará en los sesenta, y que, como hemos señalado, ligaba ideología abstracta con reivindicacionismo concreto.

El modelo nacional popular, estatal democrático, político partidario, que hemos descrito a grandes rasgos, pese a sus realizaciones, mostró grandes contradicciones y limitaciones. Entre ellas, la marginación o subordinación e incorporación tardía de campesinos, pobladores urbanos, mujeres y ámbitos regionales. La exclusión y avasallamiento de diversas formas culturales e identidades no ligadas a la expresión política, especialmente, la de los pueblos originarios. El sectarismo consistente en la apropiación e identificación de la idea nacional-popular con un determinado sector, social, político o cultural, excluyendo a los otros, segregando en vez de integrar. Una cultura que no incentivaba la creatividad individual de cada uno ni la diversidad de expresiones, sino una homogeneidad aparente que ocultaba rasgos de mediocridad, discriminación, clasismo e hipocresía. Por último una excesiva dependencia de la economía respecto de la política en aquellos aspectos de carácter más estrictamente técnicos.

Son precisamente estas contradicciones y la dificultad de superarlas, las que crearán las condiciones propicias para una crisis que será aprovechada por los sectores dominantes de la economía y las

Fuerzas Armadas para realizar su propio proyecto socio-económico y político, ajeno por completo a los principios del modelo socio-económico y político-cultural vigente hasta entonces.

En 1970 hay una crisis de legitimidad del modelo de desarrollo capitalista vigente y de sus consecuencias sociales, pero no del régimen democrático. Durante el período 1970-1973 se desarrolla la crisis de legitimidad democrática que provoca el derrumbe de todo el sistema político.

Crisis y derrumbe del modelo societal chileno

El conjunto de partidos de la izquierda chilena, agrupados en la Unidad Popular y bajo el liderazgo de Salvador Allende compartía con las fuerzas políticas chilenas, en cualquier punto del espectro ideológico, la aspiración revolucionaria del cambio radical y global de la sociedad. En el caso de la izquierda, éste era en el sentido socialista, entendido como la sustitución de la sociedad capitalista, pero, a diferencia de la generalidad de los países latinoamericanos, en el marco de un régimen democrático que se proponía mantener⁸. Por otro lado, el proyecto de contenido, la transformación del modelo capitalista y el inicio de la transición al socialismo, pagaba el precio de las visiones predominantes de la época como el determinismo económico de la vida social y política, las elaboraciones ideológicas a través de sistemas relativamente monolíticos de pensamiento, y, sobre todo, la ausencia de modelos referenciales para el pensamiento de izquierda que no fueran los socialismos históricos o reales ni la matriz marxista leninista revolucionaria.

Pese a ello, logró formularse tentativamente una visión propia cual era la "vía chilena al socialismo", cuya mejor expresión doctrinaria es la definición que hace Salvador Allende en su Primer Mensaje al Congreso como Presidente, en 1971, al defender la relación entre democracia política y democracia económica y social. Por su parte, el programa de la Unidad Popular hacía referencia especialmente, por un lado, a ciertas metas y formulaciones estratégicas, y también a medidas específicas de corte básicamente redistributivista y de satisfacción de necesidades de las grandes mayorías. El vínculo entre ambas era la expropiación de monopolios que darían al Estado el excedente necesario para reorientar el aparato productivo hacia la satisfacción de tales necesidades.

Más allá de las insuficiencias teóricas y programáticas del proyecto de la Unidad Popular y de un discurso que exacerbaba la identidad del actor social popular, haciéndolo excluyente y confrontacional, estábamos en presencia de la búsqueda de una cuadratura del círculo: hacer una revolución por métodos no revolucionarios y democráticos sin contar con la mayoría institucional para ello, que en Chile se construye sólo a través de los partidos políticos. La necesidad de una

⁸ Sobre el período de la Unidad Popular, entre otros, para la cuestión económica, S. Bitar, **Transición, Socialismo y democracia. La experiencia chilena** (México, SigloXXI, 1979), para el análisis del proceso político M.A. Garretón y T. Moulián, **La Unidad Popular y el conflicto político en Chile** (CESOC- LOM, Santiago, 1993)

estrategia de construcción de mayoría, de cuya ausencia la Democracia Cristiana tiene también una cuenta que saldar con su pasado, es la gran lección del período. Y, sin duda, la Concertación de Partidos por la Democracia, que sucede al régimen militar en 1990, no se explica sólo por la necesidad de lucha contra la dictadura militar, sino también precisamente, por el aprendizaje de dicha lección.

Pero sería desconocer la realidad del período 1970-1973, y de su culminación en el golpe militar de 1973, analizarlo sólo en términos de un fracaso por debilidad e inviabilidad de un proyecto y su estrategia. Esos tres años estuvieron marcados por una lucha política en que un sector de la oposición a la Unidad Popular y al gobierno de Allende intentó, desde el primer momento, su derrocamiento, lo que también era buscado por el gobierno norteamericano de la época.

Entre 1973 y 1989 se produce la interrupción del régimen democrático con el Gobierno militar de facto, bajo el liderazgo de Augusto Pinochet⁹ El golpe de Estado pone fin a la regularidad institucional que había vivido el país, con escasas interrupciones en más de 150 años de vida republicana, con la disolución del Congreso; la asunción de la facultad legislativa por una Junta de Gobierno; la prohibición de los partidos políticos ; la suspensión de los mecanismos electorales, la práctica eliminación de las libertades públicas, la represión masiva y sistemática de quienes se consideraba partidarios del gobierno anterior y opositores al nuevo régimen, la subordinación del Poder Judicial al gobierno de facto. El modelo institucional del régimen autoritario se consolida al aprobarse en un plebiscito fraudulento la Constitución de 1980 que dará lugar a un proceso de institucionalización autoritaria, que desembocará ocho años después en el plebiscito de 1988.

Estamos aquí frente a la presencia de un proyecto contrarrevolucionario. La historia del régimen militar chileno desde 1973 hasta 1981/1982, es la historia de un doble proceso. Por un lado, la represión y desactivación de los actores previamente constituídos, lo que dada la naturaleza de tal constitución, pasa por la supresión de la actividad político partidaria, que se manifiesta en un primer

⁹ De la mucha literatura sobre el régimen militar de Pinochet, ver C. Hunneus, **El régimen de Pinochet** (Editorial Sudamericana, Santiago, 2000). Para los temas económicos, R. Ffrench Davis **Entre el neo-liberalismo y el crecimiento con equidad...**op.cit.

período bajo el manto de la Iglesia. Por otro lado, la personalización - mezclando los rasgos de dictadura personal y régimen institucional, del poder político y militar en el general Pinochet y la conformación de un núcleo hegemónico donde se combina este poder político personalizado con la conducción socio-económica del Estado a cargo de un equipo tecnocrático ligado muy rápidamente al capitalismo financiero, conocido como los Chicago Boys.

En 1981/1982 se produce una crisis del modelo económico que permitió la irrupción de protestas populares y de la oposición en el espacio público. Es a partir de 1986 que el régimen logra recomponer en parte su modelo económico y preparar el escenario del plebiscito de 1988, en el que la oposición acepta participar para transformarlo de mecanismo de proyección del régimen en mecanismo de desencadenamiento de un proceso de término de la dictadura y paso a un régimen democrático.

El contenido principal del proyecto civil-militar era, por un lado, revertir las relaciones entre economía y Estado, reduciendo éste al máximo posible en sus tareas integrativas, y redistributivas y en su papel de referente de la acción colectiva, sin dejar de usarlo para las tareas coercitivas y para la implantación del modelo mismo¹⁰. Por otro lado, se trataba de impulsar un conjunto de transformaciones sociales e institucionales, que fueron conocidas como "modernizaciones", cuyo significado principal era la atomización de las relaciones sociales, reduciéndolas a mecanismos de mercado y cortando su vinculación con la acción política.

La fórmula autoritaria-neoliberal se planteó como una superación radical de las fórmulas precedentes, la capitalista tradicional, la fórmula mixta de los sesenta y la de orientación socialista de la Unidad Popular. Con la supresión de la política, el régimen militar pudo realizar las transformaciones que el núcleo tecnocrático estimó necesarias, las que se impusieron desde el Estado, sin contrapesos sociales. Los costos sociales del ajuste han sido largamente analizados y los

¹⁰. Como dato comparativo, el gasto público en relación al PIB pasó de 50% en 1972 a 305 en 1988. **Reseña del gobierno**, op.cit La modificación del rol del Estado en la economía bajo la fórmula neoliberal impuesta por el régimen de Pinochet, se movió en tres vectores principales El primero de ellos, fue el de las privatizaciones, tanto de empresas como de servicios sociales. El segundo, una política de apertura al comercio exterior, con incentivos y facilidades para la diversificación de las exportaciones y un facilitamiento para la inversión extranjera, que otorgó franquicias para los flujos de capital. El tercero, la desregulación estatal de precios y de las actividades económicas en general, así como también de la fuerza de trabajo, tanto en lo que se refiere a los mercados laborales como a los salarios.

efectos sobre la sociedad actual y futura son indudablemente una onda de largo plazo. La fórmula neoliberal produjo no sólo una reestructuración económica, sino también una intervención en la política, que significó un modelo institucional de régimen, plasmado en la Constitución del 80; un reordenamiento social que significó la emergencia del actor empresarial y la disolución de los actores sociales populares; y cambios en las orientaciones culturales de los actores sociales y políticos.

No tiene sentido, entonces, hablar de un milagro económico chileno. Es cierto que el régimen militar logró imponer un nuevo modelo de desarrollo, pero ello fue después de un estruendoso fracaso en los años 1981-1982, que significó crecimiento regresivo durante un período, logrando una cierta recuperación a partir del año 1986. Sin embargo no existió tal recuperación de respecto de ningún indicador social si se compara con los años setenta.¹¹

En síntesis, la dictadura militar y su modelo neo-liberal produjeron un cambio en la matriz socio-política chilena, aunque como no creó una nueva, implicó básicamente su desarticulación.

LA SOCIEDAD CHILENA ACTUAL

La democratización incompleta

La alternativa en el plebiscito de 1988 era la mantención de Pinochet por otros ocho años o su derrota para llamar a elecciones al año siguiente bajo el marco de la Constitución de 1980. El triunfo de la alternativa opositora abrió un proceso de transición a la democracia culminando con la elección en 1989 de Patricio Aylwin apoyado por una coalición de partidos del espectro de centro-izquierda, denominada Concertación de Partidos por la Democracia. El régimen democrático ha seguido funcionando con la institucionalidad de la Constitución de 1980, con las reformas introducidas en

¹¹. Para señalar sólo uno, si se mira el plazo largo de la historia económica que se ha reseñado en este trabajo, es posible afirmar que la redistribución regresiva del ingreso acaecida bajo el régimen militar significó para la población chilena la pérdida no sólo de una década como se afirma en los diagnósticos de América Latina en los ochenta, sino la pérdida de cuatro décadas. En los cincuenta el porcentaje de familias en estado de pobreza era de alrededor de 40 %, la misma proporción que exhibía el país a comienzos de los noventa. Una completa revisión de las políticas económicas de la dictadura y los indicadores respectivos, en R. Ffrench Davis, **Entre el neo-liberalismo...**op.cit

1989 por un acuerdo oposición-gobierno militar para facilitar las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias en Diciembre de ese año, después de diecisiete años de dictadura, y con la reforma al sistema de elección municipal que permitió elecciones en 1992. En 1993 fue elegido el segundo gobierno de la Concertación, el de Eduardo Frei R-T, y en 2000 el tercero, de Ricardo Lagos. Los dos primeros gobiernos de la Concertación fueron presididos por un demócratacristiano y el tercero por el líder del bloque más de izquierda conformado por el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, apoyados por el Partido Radical. En las elecciones presidenciales, en las parlamentarias de 1989, 1993 y 1997, hechas bajo el sistema electoral bi-nominal mayoritario impuesto por la legislación de Pinochet, así como en las municipales de 1992, 1996 y 2000, se han ido conformando dos grandes bloques, uno la Concertación, con cuatro partidos (Demócrata Cristiano con 23% de la votación, Socialista y Partido por la Democracia relativamente empatados que suman un porcentaje similar al de la DC y Partido Radical, alrededor de 4-5% y el otro de derecha opositora decantado finalmente en dos partidos (el principal y más ligado al pinochetismo, la Unión Demócrata Independiente, y Renovación Nacional con un proyecto más democrático permanentemente derrotado internamente en el bloque, ambos varían entre 35 y 44%). La distancia electoral entre ambos bloques que fue de 43% y 54,7% en el plebiscito, a favor de la Concertación, disminuyó fuertemente en las últimas elecciones presidenciales de 2000 a 48-52%, volviendo la derecha a su porcentaje inferior al 44% en las elecciones municipales del 2001 y la Concertación a cerca del 53% (cifras aproximadas). Las otras fuerzas políticas, de tipo alternativista o el Partido Comunista, no tienen representación parlamentaria, debido al sistema electoral que privilegia a la primera minoría y castiga a las otras.

La transición política en Chile se desencadenó con el resultado del Plebiscito de 1988. En ese momento, se canceló definitivamente toda posibilidad de regresión autoritaria pese a las intenciones claramente no democráticas del pinochetismo civil y militar. Y ella terminó con el ascenso del primer gobierno democrático en Marzo de 1990. Pero el término de la transición no significó que, junto a gobiernos plenamente democráticos, el régimen político y la sociedad hubieran alcanzado la democracia propiamente tal. Se trató de una transición incompleta que dio origen a una democracia restringida, de baja calidad y llena de enclaves autoritarios. La tarea no era ni continuar con la transición, ya terminada, ni consolidar el nuevo régimen post-autoritario que ya estaba consolidado en la medida que no había regresión autoritaria posible. Era reformar profundamente ese régimen y

generar una auténtica democracia política donde no fueran los poderes fácticos o las minorías políticas las que fijan los límites de la voluntad y soberanía populares. En otras palabras, había que resolver los problemas dejados por la transición y que ésta no había resuelto.

La democratización política chilena fue exitosa en la medida que desplazó a la dictadura, impidió la descomposición de la sociedad al controlar las variables macro-económicas, y aseguró un gobierno formado por la coalición democrática mayoritaria. Pero no puede hablarse de "transición ejemplar" o "exitosa" si se consideran el resultado de este proceso y la calidad de este régimen democrático. Este se caracteriza por la precariedad institucional, la presencia de poderes fácticos y la debilidad de representación debido a las tensiones entre actores políticos y sociedad. Asimismo, por la fragilidad de sus bases culturales, debido a la ausencia de consensos básicos, y a la falta de cohesión, unidad y dirección societal, debida al resquebrajamiento del poder estatal¹².

En efecto, en Chile la transición o el paso de un régimen de dictadura a un régimen democrático, aunque incompleto, resolvió varios problemas, pero dejó sin resolver algunos y generó otros.

El primer problema que la transición política resolvió fue el término de la dictadura. Y no sólo hubo transición propiamente tal, sino que también consolidación o ausencia de riesgo de regresión autoritaria. Y la paradoja estriba en que lo que se consolidó fue un régimen con elementos tanto democrático como autoritarios.

Una segunda cuestión en que la transición chilena fue exitosa, a diferencia de prácticamente todas las otras de nuestro continente, es la constitución a nivel de gobierno de una coalición mayoritaria formada por la casi totalidad del espectro opositor a la dictadura, con excepción del Partido Comunista, lo que a su vez superaba el gran problema de la democracia chilena antes de su derrumbe en 1973: la ausencia de un bloque mayoritario de centro e izquierda. Así, el elemento más positivo de la transición a la democracia en Chile ha sido un gobierno mayoritario, formado por la

¹² Sobre el proceso de democratización chilena, véase, entre otros, E. Boeninger, **Democracia en Chile**, op.cit. P. Drake y P Jaksic, eds. **El difícil camino hacia la democracia en Chile 1982-1990** (Santiago, FLACSO,1993), que incluye la segunda mitad del régimen militar, M-A: Garretón, **Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones** (Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1995). Una revisión más reciente, A. Menéndez y A. Joignant eds. **La Caja de Pandora. El retorno de la transición chilena** (Planeta/Ariel, Santiago 1999).

mayoría de las fuerzas democráticas y progresistas. Por supuesto que se trata de un gobierno mayoritario en lo social, lo político y lo electoral. No así en lo institucional por la presencia de los enclaves autoritarios, que generan problemas de calidad en el régimen democrático o post-autoritario, a los que nos referiremos más adelante. Pero todo ello no quita la importancia de este segundo aspecto exitoso de la democratización

Un tercer problema resuelto por la democratización política chilena, se refiere a la ausencia de una crisis económica coyuntural. La existencia de ésta en muchos otros casos de transiciones, alteró la correlación de fuerzas pro-democráticas y abrió espacios de desestabilización o deslegitimación, por parte de poderes fácticos o por distanciamiento de sectores medios y populares. No estamos afirmando que en el caso chileno no haya problemas serios con el modelo económico de crecimiento y su imposibilidad de convertirse en modelo de desarrollo autosustentable. Tampoco estamos desconociendo que, si bien el ritmo de crecimiento ha sido alto, al menos hasta los efectos de la crisis asiática de 1997, y la superación relativa de la pobreza significativa, no se han resuelto sino que en ciertas dimensiones se han agravado los problemas de equidad e igualdad. Simplemente, estamos señalando que el bloque democrático, social y político, en los primeros seis o siete años de gobierno post-dictatorial, no estaba obligado a políticas que tuvieran efectos anti-populares o regresivas para resolver una crisis coyuntural heredada.

Sin embargo, la consecuente oportunidad de concentrarse en los aspectos propiamente políticos para completar la transición superando los enclaves autoritarios, desgraciadamente no fue aprovechada. El otro lado oscuro de este aspecto positivo, es que la prioridad absoluta dada a la estabilidad económica, desincentivó la constitución y acción de movimientos y actores sociales y dañó su reñación con la política y los partidos.

Los éxitos relativos de la democratización política chilena pagaron un costo que puede apreciarse en los grandes problemas no resueltos, es decir, fracasos relativos debidos no a la naturaleza misma del proceso, sino a su conducción política .

El primero de los problemas no resueltos o de los fracasos de la democratización política chilena, es

la cuestión de los enclaves autoritarios, que hacen a la calidad y profundidad del nuevo régimen democrático. Hemos dicho que en el caso chileno, los tipos de enclaves autoritarios son tres. El institucional, expresado sobre todo aunque no exclusivamente, en una Constitución que limita severamente la voluntad popular. El ético-simbólico, expresado en los problemas pendientes de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura. El actoral, expresado en aquellas personas y grupos que se constituyen como actores sociales que buscan proyectar y adecuar a las circunstancias del régimen democrático, los principios y orientaciones del régimen militar y su "obra". Este último enclave, en el caso chileno, está constituido por cierto núcleo militar y por sectores civiles de ambos partidos de derecha (UDI, principalmente, y, también, Renovación Nacional) y medios de comunicación que tienden a actuar como sus representantes políticos. Es lo que se ha denominado el "pinochetismo". Es evidente que el enclave ético-simbólico (el tema de la verdad y justicia en los crímenes cometidos por la dictadura) y la presencia de actores autoritarios, tienen también un componente institucional, como la ley de amnistía el primer caso, y la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas en el segundo, por citar sólo dos ejemplos.

En el caso chileno, los enclaves no se trataron en conjunto, sino que fueron abordados separadamente y sólo hubo escasas, tardías y fracasadas iniciativas de atacar la globalidad del problema. Ello, por un lado, debido a la permanente presión militar en estas materias y a la radical oposición de la derecha liderada por el sector pinochetista, a cualquier reforma de la institucionalidad heredada. Pero también, por otro, debido al error de cálculo de los gobiernos de la Concertación, que temiendo alguna regresión autoritaria o dificultades graves en otros campos programáticos, no le dieron a los temas institucionales y políticos de superación de los enclaves la importancia que tenían para el futuro político y también para la gran mayoría de la población.

Desde mediados de los noventa se hace patente que no sólo los enclaves heredados de la dictadura entraban la expresión de la voluntad y soberanía populares. También lo hacen muchas de las fórmulas e instituciones que fueron establecidas como resultado de negociaciones entre la oposición democrática y la dictadura en 1989, y entre los gobiernos democráticos y la oposición de derecha con posterioridad. Entre este tipo de traba o amarre, se encuentran aquellos aspectos que se negociaron mal con ocasión de la reforma constitucional de 1989 (elección de autoridades municipales, senadores vitalicios y designados, períodos presidenciales, sistema electoral, etc). Pero

también ciertas normativas bajo los gobiernos democráticos en materia de televisión, municipalización y regionalización, leyes laborales, marcos regulatorios de las empresas de servicio público privatizadas, política de defensa y gasto militar, etc.¹³

Pero sería falso sostener que ningún avance se ha hecho en materia de enclaves autoritarios en el ámbito ético simbólico (por ejemplo, la Comisión Rettig y su informe sobre Verdad y Reconciliación, la legislación sobre reparación a las víctimas y la existencia de una corporación para ello, la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos que responsabilizó a los militares de la información sobre detenidos desaparecidos) o en materia de aislamiento político de los núcleos autoritarios duros (por ejemplo, la pérdida de influencia y poder reales de Pinochet). El desafuero de Pinochet y su posterior detención domiciliaria como culpable de algunos de los crímenes cometidos bajo la dictadura, sin duda por efecto de la acción de la justicia española e inglesa y aunque haya terminado en sobreseimiento temporal por demencia, implicaron un cambio radical del clima moral imperante en el país y la esperanza que la impunidad no fuera el destino final de los crímenes cometidos por la dictadura. En cambio en el plano político-institucional poco se ha avanzado en diez años, aunque recientemente parece abrirse espacio la posibilidad de acuerdos sobre reformas constitucionales sobre el sistema político y quizás el tema de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político, no así en la dimensión institucional de la justicia respecto de los crímenes y violaciones de derechos humanos bajo la dictadura.

De modo que aunque existe democracia, ésta es incompleta y de pobre calidad, sometida al poder de veto de la minoría de derecha y a la posibilidad de presión militar, sin expresión institucional de la pluralidad política, lo que afecta directamente el tratamiento de cualquier problema del futuro.

El segundo problema no resuelto por la democratización política chilena, corresponde a la contraparte del éxito logrado por la continuidad de una coalición mayoritaria de gobierno, formada por casi todo el bloque opositor a la dictadura, es decir, el centro y la izquierda. Si esto ha sido posible, es porque en Chile el sistema partidario, cualquiera sea la crítica que se le haga, es un

¹³ En el caso de las leyes laborales, sólo a mediados del 2001 se logró modificar algunos aspectos de protección a los trabajadores que habían sido mal planteados en las reformas laborales de comienzos del gobierno de Aylwin.

sistema enteramente legitimado y donde la participación política y el voto extra o anti-partidarios son minoritarios, a diferencia de gran parte de los países latinoamericanos¹⁴. Ahora bien, ocurre que este sistema partidario legitimado está basado en fraccionamientos, antagonismos y proyectos sociales de larga data. Estos, por supuesto, no han desaparecido, pero no dan cuenta plenamente de las nuevas problemáticas y visiones de la sociedad.

A esto hay que agregar que la coalición de gobierno está formada por partidos que expresaron históricamente los principales conflictos de la sociedad chilena y a los sectores sociales que encarnaban el cambio social. Su responsabilidad de administración del proceso de democratización política, deja a los actores sociales huérfanos de representación en aquello que no se refiera directamente a los temas políticos y les exige subordinar su dinámica a los requerimientos de éstos. El rol fundamental jugado por los partidos en la democratización política, y sin el cual ésta no se había realizado en Chile, tiene, así, como contraparte la dificultad de representación de la sociedad bajo el régimen democrático. Y quienes pueden asumir esta representación de la conflictualidad son más bien actores políticos de ruptura, como el Partido Comunista o los agrupamientos políticos alternativos, éstos últimos en general de corta vida. Pero no poseen la capacidad política de respuesta que no sea la pura expresión del descontento,

El tercer problema no resuelto, en parte vinculado al anterior, ha sido la ausencia de debate sobre los grandes temas que definen la sociedad y las bases fundacionales de la democracia, compensado sólo por la ilusión del consenso. Este sólo existió, en realidad, para terminar con la dictadura. Lo que hubo después fueron acuerdos circunstanciales o puntuales entre gobierno y oposición. Pero nadie en ninguna parte del mundo habría osado llamar a estos últimos "democracia de consensos". La ausencia de verdaderos consensos en los temas básicos de reconstrucción de la sociedad post-dictatorial, se explica, por un lado, por el veto de la minoría y los poderes fácticos (organizaciones empresariales, grupos económicos que controlan los medios de comunicación, las mismas Fuerzas Armadas, en parte, el Poder Judicial, la minoría electoral de derecha con capacidad de veto dado el

¹⁴ En las últimas elecciones presidenciales, contrariamente a lo sostenido por los medios de comunicación y a las tendencias dominantes de la campaña electoral, el sustrato político-ideológico de la población fue decisivo en los resultados finales. Ver M. A. Garretón, Chile's elections: change and continuity. (Journal of Democracy, Volume 11, N° 2, April 2000) .

sistema electoral. Por otro, porque no ha habido debate sobre los temas cruciales o este debate ha sido ahogado por las exigencias de estabilidad económica o política. Por último, porque sigue existiendo un trauma del disenso, el conflicto y la confrontación, a los que se demoniza o patologiza. Y para que haya consenso societal básico, debe haber debate y conflicto.

En este sentido, los temas centrales sobre los que el debate ha existido, aunque muy limitado, son la cuestión de la justicia en materia de violación de derechos humanos bajo la dictadura, la reforma regional, el problema mapuche, el tema de la igualdad y la redistribución, los temas ligados a la convivencia y la reproducción vetados en general por la Iglesia, el modelo constitucional, la reformulación del modelo de desarrollo ante la globalización, etc. Vale la pena indicar, en cambio, que un cierto consenso sobre la prioridad de la educación, que dio origen a la reforma educacional, la lucha contra la pobreza, que generó la Comisión Nacional contra la Pobreza aunque se omitió el tema de redistribución, y la modernización de la Justicia y la reforma del Código Penal con la creación del Ministerio Público y el juicio oral, son sin duda avances importantes.

El cuarto problema no resuelto por la transición y democratización políticas está relacionado con el debilitamiento y dificultad de reconstrucción de la capacidad de acción estatal. Ello, especialmente, en lo que se refiere al control de las fuerzas económicas. No hablamos aquí de problemas que no tienen que ver estrictamente con la cuestión central de la democratización política, sino de un aspecto que hace a la esencia del régimen democrático: la sujeción de todos los actores o fuerzas a la regla de la mayoría y la minoría, la representación, los partidos políticos y la ciudadanía. Ello no ocurre ni con la economía, ni con la concentración de los medios de comunicación en un par de grupos económicos. Lo que obliga a la reconstrucción de la relación entre economía y política. Porque si no, el régimen político es una ilusión. La reconstrucción de un sistema político con un Estado dirigente que reemplacen tanto a los ideologismos del pasado como a las versiones neoliberales recientes, es el problema crucial del futuro democrático.

¿Un nuevo modelo societal?

Nuestra hipótesis básica es que en Chile hemos asistido en las últimas décadas a la disolución de la matriz que hemos llamado nacional-popular, estatal democrática, político-partidaria. De modo que,

recuperada parcialmente la institucionalidad democrática, se plantea hoy una nueva cuestión fundamental. Esta es: qué queda y cómo puede reformularse en el mundo globalizado de hoy un proyecto de Estado-nación, probablemente multinacional si consideramos los pueblos originarios, en que el sujeto principal muy diverso y polivalente es un pueblo que se organiza y decide su destino bajo formas democráticas. Sin una idea fuerza o proyecto nacional-estatal, se deja de ser un país, para transformarse en segmentos dispersos que se pliegan subordinadamente a los grandes centros que operan en el mundo. Esto es, en una suma de poderes fácticos transnacionales y nacionales con una inmensa masa de gente que no logra integrarse y, simplemente, sobra.

El régimen militar y las transformaciones socio-económicas impulsadas por él, que significaron básicamente el paso a un nuevo modelo de desarrollo, tuvieron una significación más profunda que la mera desarticulación de la sociedad predominante hasta los setenta. Se intentó reemplazarla por otra. En su tipo puro, se trataba de un proyecto neo-liberal, que implicaba, más que la autonomización de la economía respecto de la política, la utopía de la subordinación de ésta a aquélla. Se apostaba a los mecanismos de mercado como la nueva "columna vertebral" constitutiva de actores sociales que reemplazara tanto el sistema de representación partidaria como el rol referencial central del Estado.

Desde el punto de vista de la desarticulación de la matriz previa, el régimen militar tuvo éxito. Desde la perspectiva de su reemplazo por la matriz neo-liberal, fue un fracaso. Ni quedó en pie el antiguo modelo socio-económico ni se impuso consistentemente el modelo neo-liberal en lo que no tuviera que ver con la estrategia de crecimiento, al menos desde que se estableció un régimen democrático, por baja que sea la calidad de éste. Junto a la descomposición del modelo previo, subyacen elementos de él en una nueva articulación con rasgos parciales del proyecto neo-liberal y con rasgos nuevos que no pertenecen ni a uno ni a otro.

De modo que el Chile de la post-transición presenta el revés de la tesis clásica de Aníbal Pinto¹⁵, que definía una contradicción básica entre una economía atrofiada y un sistema político institucional y cultural desarrollado. Esta debilidad del sistema económico, planteaba la cuestión de autonomizar

¹⁵ Ver A. Pinto, **Chile, un caso de desarrollo frustrado**, op.cit

la economía de sus amarres políticos. Hoy día el problema es exactamente el inverso: una economía en despegue, al menos hasta mediados de los noventa, pero sobre todo despegada del país y la sociedad. Frente a ello, un sistema político, institucional y cultural atrofiado. Baste recordar los enclaves autoritarios, la debilidad del sistema de descentralización y regionalización, la crisis del sistema educacional y el colapso de la educación superior, la enorme debilidad de los actores sociales especialmente para negociar con el poder económico, el retraso abismante de la institucionalidad sobre la organización familiar¹⁶ las dificultades para redefinir un nuevo rol dirigente y protector del Estado. Sin desconocer los avances que el régimen democrático ha hecho en varios de estos planos, éstos son siempre parciales porque quedan encerrados en el marco institucional heredado. A su vez, la naturaleza del modelo socio-económico ha impedido que en momentos de crisis económica, como en 1998 y 1999 se cuente con los recursos institucionales que permitan afrontarla.

En síntesis, los problemas fundamentales del país post-transición tienen que ver con la organización de la polis, de la capacidad de conducción, de hacer que en la política se expresen los problemas culturales y sociales y que la economía se ligue al desarrollo general de la sociedad. Ello quiere decir que no hay propiamente una crisis de lo político y su legitimidad, ni siquiera en los jóvenes¹⁷. Lo que hay es una crisis de la capacidad y de la actividad políticas para dar cuenta de lo político y no girar en torno a sí misma. A la larga, el riesgo es que ello lleve a una crisis de legitimidad.

Digamos, entonces, que estamos frente a una matriz socio-política o una sociedad de tipo híbrido respecto de su modelo de constitución predominante en la mayor parte del siglo XX. Ella presenta un rasgo de continuidad y un rasgo de ruptura, además de elementos que se definen autónomamente

¹⁶ Recordemos que Chile es el único país occidental donde no existe ley de divorcio. Por otro lado, cabe reconocer un avance importante en las legislaciones sobre filiación, violencia familiar, tuiciones y no discriminación de la mujer, entre otras.

¹⁷ Lo que no significa que no haya una distancia estructural entre jóvenes y política, que no ha dañado sin embargo la legitimidad de la política en su ámbito propio. M.A. Garretón y T. Villanueva, "Política y jóvenes en Chile. Una reformulación" (Participa y Fundación F. Ebert, Santiago, 1999)

y que son propiamente emergentes¹⁸.

La ruptura consiste en que la economía se ha autonomizado de la política, y se ha sometido aparentemente a su propia dinámica de desarrollo, en la que el Estado sólo acota pero no define la dirección. Pero esto no significa que la economía obedezca a dinámicas propias del desarrollo nacional, sino que es esta autonomización respecto de la política o del Estado, va acompañada de una nueva subordinación o dependencia, esta vez respecto de las fuerzas transnacionales de los mercados. Quizás el elemento central de esto sea que el modelo socio-económico de crecimiento ha dejado de ser un modelo de desarrollo, o dicho de otra manera, que la economía no puede asegurar por sí misma la integración social, como puede verse en el caso del empleo.

Los conflictos sociales parecieran reflejar la contradicción entre un país que resuelve relativamente bien sus problemas económicos de corto plazo, pero que ha dejado pendientes o mal resueltos los problemas institucionales, políticos y culturales y también los que se refieren a un modelo de desarrollo de largo plazo sustentable socialmente, donde el problema central es el de la desigualdad social. Frente a las fórmulas de desarrollo seguidas antes de la dictadura militar y frente al modelo neo-liberal, los gobiernos democráticos han definido su estrategia como de desarrollo con equidad. Tanto en el campo del crecimiento económico, hasta la crisis de 1997-1998, como en el de la superación de la pobreza y en el del gasto social del Estado, los avances han sido significativos. Sin embargo, las desigualdades socio-económicas se mantienen y, en algunos casos aumentan¹⁹.

¹⁸ Sobre las transformaciones de la sociedad chilena en las últimas décadas y el debate en torno a ellas, T. Moulian **Chile, Anatomía de un mito**, op.cit.; PNUD Desarrollo Humano en Chile (1998). Las paradojas de la modernización (PNUD 1998); P. Drake y E. I. Jaksic (comps.) **El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa**. (LOM, Santiago, 1999); M.A. Garretón, **La sociedad en que vivi(re)mos**, op.cit.; A. Wilde, **Irruptions of Memory: Expressive politics in Chile's transition to Democracy**. (Journal of Latin American Studies, 31, 1999); Revista Persona y Sociedad, **Chile después de los noventa. Encrucijadas de nuestro desarrollo**. (Vol XV N°1, Mayo 2001); R. Cortázar y J. Vial, eds. **Construyendo opciones**. (CIEPLAN-DOLMEN, 1998); C. Toloza C. y E. Lahera, E. eds. **Chile en los 90**. (Dolmen-Presidencia de la República, Santiago, 1998); A. Díaz y X. Martínez, **Chile: The great transformation**. (The Brookings Institution, Washington DC, 1995); X. Martínez y A. León, **La estratificación social chilena hacia fines del siglo XX** (CEPAL, Serie Políticas Sociales, Santiago, Agosto 2001))

¹⁹ El crecimiento económico en los noventa hasta la crisis de 1997 alcanzó tasas de 7% anuales, el aumento del gasto social del Estado y las políticas contra la pobreza la hicieron disminuir de un 33,3% en 1990 a un 17,8% en 1998. Pero las desigualdades sociales se mantuvieron constantes y entre determinados grupos aumentaron, (esto último puede verse en los estudios de H. Vega **Distancias económicas e Integración social**, Revista Mensaje, Septiembre 2001; X. Martínez y A. León, **La estratificación social...op. cit**). La distribución del ingreso se

Si existe alguna continuidad con la matriz socio-política de corte nacional-estatal-democrático-popular, ella se refiere a la vigencia del sistema de representación partidaria. Aunque con una menor legitimidad que antaño, ello impide su reemplazo por otros canales de constitución de actores y de representación de la sociedad civil. respecto del Estado, como ha ocurrido en otros países con determinados liderazgos personalistas y medios de comunicación, en cambio, su rol referencial para la acción colectiva deja de ser absoluto. Es decir, la política-idológica-partidaria en su actual conformación de derecha opositora y coalición gubernamental de centro-izquierda, principalmente y con sus matices partidarios internos al interior de cada bloque , y alternativismos de izquierda en menor grado, sigue siendo el sustrato o referente básico para las opciones propiamente políticas, como las electorales, pero ya no lo son como antes en otros campos de la vida social. Ello significa que se produce, en campos no estrictamente políticos pero que dependen de decisiones en este ámbito, una escisión entre opinión pública y clase política, como lo muestran la abrumadora mayoría en favor de una ley de divorcio o de la justicia con castigo a los culpables de violaciones a los derechos humanos, sin que se cristalicen medidas al respecto. Hay, así, un equilibrio mayor entre la dimensión política y otras como la orientación al consumo, los aspectos culturales sobre todo en los jóvenes, las búsquedas de sentido más individuales o de pequeños grupos, las acciones corporativas de grupos otrora enteramente referidos al Estado.

En la sociedad chilena de hoy, deja de haber la correspondencia clásica entre modelo de economía, modelo político y modelo socio-cultural y la tradicional relación entre estos componentes, destacada

mantuvo altamente concentrada. Mientras el 20% de los hogares más ricos captó un 57,3% de los ingresos autónomos, el 20% más pobre percibió sólo un 3,7%, esto es, la participación del 20% más rico es cercana a 15,5 veces la participación del 20% más pobre. Al comparar la evolución entre 1990 y 1998, la participación en el ingreso se ha mantenido casi inalterada. Cabe señalar que al corregir estos datos por los subsidios del Estado, disminuyen un tanto tales desigualdades. (H. Vega, **Distancias económicas...**, op.cit). Otro dato que refleja las profundas desigualdades internas, es la repartición de los beneficios del crecimiento económico entre los trabajadores (salarios) y las ganancias que quedan en manos de los dueños del capital. Mientras el PIB durante el periodo 1993 a 1997 creció un 34,4%, los salarios reales aumentaron un 20% a diciembre de 1997, lo que refleja un incremento de la brecha funcional de la distribución de ingreso, en tanto la participación de los salarios en el producto disminuye. Por otra parte, al tomar en cuenta el Producto Interno Bruto, las remuneraciones y el excedente de capital, se constata que en los años 1970 a 1993 ha existido un retroceso en el ingreso de la masa salarial y un aumento de los excedentes de capital. Esta tendencia entre 1995 a 1997 se ha traducido en un retroceso del 20% de la masa salarial y un aumento del 22% de los excedentes de capital (Varios autores, **Diagnóstico de Chile**, PROLIDES, Santiago 2001) En general para datos sobre crecimiento económico, desigualdades y resultados de políticas sociales, R. Ffrench-Davis, **Entre el neo-liberalismo y el crecimiento con equidad**, op.cit.

por muchos autores, tiende a invertirse: el desarrollo político-institucional en relación a la base económica, cede paso, hasta un cierto momento, a un dinamismo de la economía y a un enorme retraso del sistema político-institucional. Pero este dinamismo de la economía, afectado desde hace algunos años por la crisis mundial y por retraso en la reactivación, ya no se debe a un impulso endógeno de una clase dirigente nacional "emprendedora o innovadora", sino a las fuerzas heterónomas del mercado transnacional y de la globalización, a la que dicha clase busca simplemente adaptarse. A su vez, el retraso político-institucional se expresa no sólo en el aparato estatal-político, sino en todo el sistema institucional, como hemos indicado.

En la situación actual el congelamiento de la dimensión político-institucional, respecto de una base económica dependiente de la economía transnacional, se explicaría por dos factores. Por un lado, la presencia de los enclaves autoritarios institucionales. Por otro, la ausencia de modelos y proyectos alternativos de índole político-cultural. Dada esta ausencia, predominan las "fuerzas naturales" de la economía transnacional.

Pareciera ser muy temprano para zanjar la cuestión de si estamos ante una matriz emergente de relaciones entre Estado y sociedad, o si se trata de una situación de transición a otro modelo que no conocemos. Las interrogantes abiertas por la situación económica mundial y el futuro de procesos de globalización e integración económica acentúan esta duda.

En todo caso, el futuro de la sociedad chilena radica en su capacidad de construcción de un sistema socio-político que rescate la idea de una comunidad nacional que no se reduce a un mercado ni a un conjunto de instrumentos y técnicas. Lo que el país necesita ya no es un "milagro económico" sino un gran salto adelante que debe ser político, institucional y cultural.

LOS DESAFIOS DE UN NUEVO PROYECTO DE PAIS

De lo que se trata es de responder si es posible pensar en un proyecto o tarea nacionales, tal como lo fueron el proyecto nacional-popular, el desarrollo desde el segundo cuarto del siglo pasado, las reformas estructurales de los sesenta y setenta o la recuperación de la democracia en los ochenta y principios de los noventa.

El primer gobierno democrático, de Patricio Aylwin, definió la tarea nacional en términos de "transición a la democracia" y apuntó hacia la idea de un "crecimiento con equidad", manteniendo los equilibrios macro-económicos y buscando corregir los efectos sociales del modelo económico. Asimismo, definió un método de negociaciones y acuerdos puntuales que llamó "democracia de consensos". Lo cierto es que ya no se estaba en ninguna transición ni tampoco hubo, como hemos dicho, verdaderos consensos. Pero, en todo caso, cualquiera sea la crítica que se haga a estas definiciones por parciales o insuficientes, hay que reconocer que metas y orientaciones hubo y que, en términos de ellas, el gobierno avanzó. Al contrario, cabe recordar que durante el segundo gobierno de la Concertación -pese a una muy buena performance económica hasta 1997 y a los importantes avances en términos de obras públicas y de reforma a la justicia y a la educación, en materia de proyectos y orientaciones, de metas que movilizan energías sociales y culturales, el país fue a la deriva, sin una brújula compartida y, por lo tanto, sin conducción política. En el gobierno de Ricardo Lagos, se ha recuperado el liderazgo presidencial: La meta ha sido planteada en términos de ser un país desarrollado en el segundo centenario de la existencia como nación independiente. Sin embargo tal meta no ha logrado aún plasmarse plenamente en un conjunto sistemático y coherente de políticas públicas ni tampoco pareciera que el conjunto de los actores sociales y políticos se encaminaran con claridad en la misma dirección:

Es evidente que ya no puede plantearse como la problemática chilena ni latinoamericana la "transición a democracia y a la economía de mercado", como fue indicado hace ya más de una década. a comienzos de los noventa. Si la democracia alcanzada es incompleta y de débil calidad, ya no estamos más en situación de transición, sino de la necesidad de una profunda reforma política. Por otro lado, el modelo de economía de mercado neo-liberal o "modelo privatizador" está agotado como base de un desarrollo nacional integrado y auto sustentable, aquí y en todas partes del mundo. El mundo se mueve dificultosamente hoy entre las tendencias globalizadoras y la necesidad de reponer el papel orientador de los Estado nacionales y sus alianzas.

Sin volver a la antigua subordinación de la economía a la política, lo que es prácticamente imposible, cabe pensar en fórmulas alternativas a las actuales que pasan por devolver al Estado, a nivel nacional y de los bloques supra nacionales, un rol dirigente en el desarrollo, establecer marcos

normativos regulatorios sobre las fuerzas del mercado y asegurar el control ciudadano sobre tales marcos y fuerzas. En otras palabras, reconociendo que política y economía son cosas distintas y autónomas, se trata también de introducir los principios éticos de la democracia en el funcionamiento de los mercados.

Dicho de otra manera, lo que está en juego en los próximos años es la existencia del país como comunidad con un sentido colectivo en el que se expresa su pluralidad y diversidad. El proyecto de país, sus formas de convivencia, las identidades que lo constituyen y su inserción autónoma en el mundo globalizado, son el meollo de la política hoy día.

Cinco parecen ser los principales desafíos en el caso chileno en el desarrollo de un tal proyecto de país.

El modelo político: reforma y conducción.

Chile se ha dado Constituciones desde muy temprano en su historia independiente, las que han sido de larga duración desde 1833, y consideradas legítimas por la comunidad nacional, independientemente del modo como fueron aprobadas. Sus contenidos, cuando perdían legitimidad o debían reformularse ante problemas nuevos de la sociedad, eran reformados consensualmente. Esta trayectoria fue interrumpida por la Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet en 1980. Dicha Constitución no era legítima en su origen por haberse implantado en un plebiscito fraudulento. Tampoco en su contenido, porque no revelaba ningún consenso nacional básico. Por el contrario, imponía una forma autoritaria de gobierno, se articulaba en torno al principio único de propiedad definiendo un orden público económico que se buscaba perpetuar. Le daba poderes de veto a las Fuerzas Armadas, no aseguraba la representación adecuada de mayorías y minorías, restringía la soberanía popular y hacía imposible su modificación. Si la oposición a la dictadura entonces aceptó participar en el Plebiscito de 1988 fue, precisamente, porque en la Constitución se consagraba ese mecanismo como la única posibilidad que, eventualmente, permitiría separar a Pinochet del poder e iniciar un proceso de transición a la democracia, con gobiernos elegidos por el pueblo que podrían luego reformar la Constitución íntegramente. Por ello, las negociaciones que la oposición democrática hizo con la dictadura después del Plebiscito, fueron dirigidas a asegurar, como primer

paso, la posibilidad de un gobierno democrático, aunque limitado por el marco institucional.

La Constitución de 1980, en su esencia antidemocrática pese a las reformas introducidas antes y después del primer gobierno democrático, quedó instalada sin otra legitimidad que la de facto. Y la idea de nueva Constitución de origen y contenido enteramente democráticos fue siempre denegada por la oposición pinochetista a los gobiernos democráticos. En tal situación, éstos se limitaron a intentar algunas reformas a los llamados enclaves autoritarios, en general, fracasadas, pero no pusieron la cuestión constitucional como centro del debate y movilización de la opinión pública, como fue el caso brasilero..

Pero no sólo se trata de una Constitución no democrática, aunque los gobiernos desde 1990 sí lo sean y ellos hayan asegurado las libertades públicas. Se trata de una Constitución de pésima calidad, por lo que ha sido la que mayores cambios ha tenido en la historia de Chile en breve período. Y ello ha sido recogido por el Presidente Lagos en su Primer Mensaje Presidencial del 21 de Mayo del 2000. En él se afirmaba que debía, desde ahora e ineludiblemente, superarse los enclaves autoritarios de la actual Constitución. Pero que, al mismo tiempo, había que pensar en la nueva Constitución para el siglo XXI, que reflejara un verdadero consenso en torno a lo que constituye al país como comunidad política en el mundo globalizado. Lo que significa repensar no sólo todas las instituciones del Estado y del gobierno sino también las nuevas formas de ciudadanía.

De modo que la cuestión es no sólo la reforma de la actual Constitución y sus leyes orgánicas, lo que avanza lenta y dificultosamente sobre todo en lo que se refiere a la inamovilidad de Comandantes en Jefe, es decir, subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político y al sistema electoral, sino que también lo que está como desafío es la transformación más profunda de todo el sistema político-institucional. Mientras la institucionalidad política chilena permanezca presa de las herencias de la dictadura, no sólo la mayoría no podrá gobernar como corresponde y la minoría y los poderes fácticos impondrán un veto permanente, sino que la gente sentirá como inútil su participación y como irrelevante la expresión de la voluntad popular, con lo que la política se irá deslegitimando irreversiblemente. Y a esta desvalorización y deslegitimación contribuyen también las visiones inediatistas, en la Derecha principalmente, pero también en personeros del gobierno y de la Concertación que se saltan el debate de ideas y que convierten a la política en una suma de

ofertas concretas para ganar apoyos, totalmente desvinculadas de ideas y proyectos que den sentido a la vida de un país, el que nunca podrá ser la pura suma de intereses particulares o aspiraciones y demandas individuales.

Es el contexto de una reforma político-institucional sustancial que cabe analizar el papel de los principales actores políticos. Ya hemos dicho que el panorama político post-transición está constituido básicamente por dos grandes bloques partidarios, además de otras corrientes de menor gravitación dada su no representación parlamentaria debido al sistema electoral aberrante vigente.

Por un lado, el bloque opositor de derecha, constituido por la UDI (Unión Demócrata Independiente) que juega el papel predominante muy vinculada a la herencia del régimen militar, y por Renovación Nacional, que se inició en el período democrático como sector mayoritario y que ha ido perdiendo su fuerza en la medida que se desdibuja su carácter de derecha democrática debido al predominio ideológico de la UDI. Este bloque ha ido aumentando su caudal electoral, en la medida que su líder principal proveniente de la UDI, Joaquín Lavín, ex-candidato presidencial que obligó a la Concertación ir a una segunda vuelta en las elecciones de Diciembre de 1999, ha intentado cambiar la identidad pinochetista y demasiado ligada a la dictadura militar por la de una fuerza política no confrontacional ni ideológica que sólo se preocupa “por los problemas de la gente”. La “despinochetización” de la convocatoria derechista, sin embargo no logra superar esta crítica de la política tradicional y la banalización de la política misma, lo que deja a la derecha sólo como una fuerza opositora que capitaliza descontento con la Concertación, pero que no perfila un verdadero proyecto de mediano y largo plazo.

De modo que, a no mediar errores significativos en la coalición gubernamental, la Concertación de Partidos por la Democracia, no pareciera que puedan ocurrir cambios significativos en la dirección de la política chilena en los próximos tiempos. Reafirmemos que la Concertación es el gran logro de la transición o democratización política chilena y la única alternativa de gobierno estable visible: Su futuro no depende de la derecha, sino de su propia capacidad para resolver problemas pendientes.

Es un hecho que más allá de las divisiones partidarias naturales en una coalición, hay tendencias

transversales a los partidos que dificultan la redefinición de un proyecto político que se haga cargo del país, más allá de las tareas de la democratización política pendientes. Así, hay una visión de derecha en la coalición de gobierno, que se distingue de la derecha política opositora tanto en su apoyo a los gobiernos de la Concertación, lo que es obvio, como en su juicio respecto del régimen militar y en el pinochetismo que caracteriza a ésta. Es decir, se trata de sectores claramente democráticos pero que comparten, con leves modificaciones, la visión de derecha en materia de modelo socio-económico y que en parte han buscado constituir nuevos referentes políticos que vayan más allá de la actual división derecha-Concertación.. La segunda visión es la pragmática, caracterizada por la prioridad otorgada al manejo del poder político, la solución puntual de problemas y conflictos, los arreglos y negociaciones coyunturales sin una visión de largo plazo, lo que lleva necesariamente a políticas a veces contradictorias o incoherentes, la elaboración de propuestas y proyectos según la correlación de fuerzas y de lo que reflejan las encuestas. La tercera visión es la propiamente progresista o, si se quiere, de izquierda, también presente en todos los partidos. Ella se caracteriza por buscar devolver al Estado su rol dirigente y a la política su carácter central, por una opción preferencial por los sectores populares y más débiles y una corrección profunda al modelo de desarrollo que garantice que el crecimiento será con igualdad desde ahora, por verdad, justicia y reparación en todos los casos de violaciones a los Derechos Humanos, por un incremento de la participación ciudadana y fortalecimiento de los actores sociales, por una mayor identificación con América Latina en la estrategia de inserción en el mundo globalizado. El problema principal de esta visión ha sido la dificultad de ligar estas metas con propuestas de políticas públicas diferentes en muchos de estos campos, por lo que se queda como una reserva crítica planteando temas de debate más que proyectos alternativos.

El futuro de la Concertación depende menos de cuestiones ligadas a las luchas interpartidarias que en la elaboración de un proyecto que perfile mucho más la diferencia con las propuestas de oposición, y tenga un sello que corresponda más a la visión progresista que a la de derecha o a la pragmática, que han primado hasta ahora. Ello es lo único que asegurará no sólo el éxito del actual gobierno, sino el futuro de la Concertación como coalición de gobierno.

La cuestión histórico-moral.

La reconstitución del país como comunidad histórico-moral pasa por el enfrentamiento de los dos grandes estigmas heredados. El primero desde su existencia como país independiente y es la cuestión indígena, principalmente del pueblo mapuche. El segundo desde la dictadura, y se refiere a las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo ella. Son las dos dimensiones de lo que se denomina la reconciliación, fuera de toda connotación de tipo religioso que quiera dársele a este término, que muestran que los problemas del país tienen que ver mucho más con el modo cómo se tratan las cuestiones del pasado que con cerrar éste. Los problemas del pasado son básicamente problemas del futuro, sobre los que no cabe dar la vuelta la hoja, porque condicionarán nuestro modo de vivir y nuestra calidad como país.

Respecto de los crímenes y violaciones de derechos humanos bajo el régimen militar, los partidarios y herederos de éste sostienen que para que haya reconciliación todos deben reconocer sus responsabilidades y culpas en el derrumbe democrático de 1973, decretando un empate moral entre víctimas y victimarios. Con razón, desde el lado de las víctimas se señala que hay una diferencia fundamental entre errores políticos y crímenes. Y tales errores han sido reconocidos por la mayoría de la clase política, con excepción de la derecha. Los crímenes, en cambio, no han sido reconocidos, esclarecidos ni castigados en su totalidad debidamente. Mientras no haya verdad y justicia, no podrá haber reconciliación.

Ha habido diversos hitos en cuanto a la reconciliación en esta materia. El primero fue el plebiscito de 1988 que desencadena el término de la dictadura y la inauguración del primer gobierno democrático en Marzo de 1990, luego de las elecciones de Diciembre de 1989. Un segundo hito está constituido por las demandas e iniciativas de verdad y justicia que incluyen la Comisión Rettig sobre Verdad y reconciliación, el juicio y condena a los cabecillas de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, servicio secreto directamente ligado a Pinochet), la reinterpretación de la ley de amnistía por el Poder Judicial que ha llevado no sólo a buscar la verdad sino a abrir procesos en los caso más emblemáticos de crímenes y violaciones cometidas desde el Estado y sus aparatos armados. Finalmente, el desencadenamiento de los procesos a Pinochet a raíz de su detención en Londres en 1998, que lleva al desafuero del ex-dictador por parte de la Corte Suprema a su regreso a Chile y la Mesa de Diálogo.. Esta última llega a implicar un reconocimiento implícito de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes cometidos, las que, al cabo de un determinado período

entregaron un informe sobre desaparecidos absolutamente insuficiente y lleno de inexactitudes. Por su parte, el arresto de Pinochet en Londres, culminó con su inculpación en Chile y su procesamiento, sobreesido por razones médico-legales de demencia del ex dictador.

Hay así, pendientes tres grandes cuestiones en materia de reconciliación. La primera es la verdad completa, con la información y paradero de los detenidos desaparecidos. La segunda es la justicia, reparación y castigo de todos los crímenes y violaciones cometidos. Este castigo sólo podría eventualmente atenuarse si hay el reconocimiento y solicitud de perdón público institucional y personal de los involucrados en los crímenes. La tercera cuestión, estrictamente vinculada al punto anterior, se refiere a una dimensión simbólica que tiene que ver tanto con la calidad de la democracia y la convivencia futuras, como con lo que se denomina la reconciliación: el reconocimiento de parte de una parte de la población civil y de los militares de los crímenes cometidos. La percepción de estos sectores que no hay diferencia entre los errores que cometió la clase política y que originaron la crisis de la democracia en los setenta y los crímenes cometidos por la dictadura. será un obstáculo permanente a toda reconciliación, un símbolo de impunidad y un instrumento de deliberación e intervención en política por parte de las Fuerzas Armadas.. No habrá, mientras esta visión se mantenga, posibilidad de superación de los enclaves autoritarios. A lo más habrá soluciones parciales que expresan sobre todo la presión militar y de sus representantes políticos.

Pero cabe aquí reconocer cierta transformación ocurrida en los últimos dos años, especialmente como secuela de hechos ya mencionados, tales como la detención de Pinochet en Londres, su desafuero como senador vitalicio y su interrumpido procesamiento, los juicios en curso contra él y otros responsables de crímenes y violaciones a los Derechos Humanos, e iniciativas como la Mesa de Diálogo. En efecto, se está más cerca, cuando haya una completa renovación general que las Fuerzas Armadas retomen su identidad histórica estableciendo su distancia con el régimen militar y sus crímenes. Ello es menos pensable en el caso de la derecha política, cuya identidad básica se constituyó bajo la dictadura y siente que cualquier reconocimiento podría significar su auto-destrucción.

.
:En el caso de la cuestión mapuche, el problema de fondo no es ni la violencia con que aparece revestido este conflicto ultimamente ni tampoco una cuestión de tierras como lo fue la cuestión

campesina de los años sesenta.

En efecto, Chile, a lo largo de su historia, se caracterizó por una resolución más institucional de sus problemas, aunque irrupciones de violencia política y social, normalmente esgrimida contra los más débiles, también salpican esta historia. Ello, fuera del caso ya mencionado de la violencia político-criminal desatada por los aparatos del Estado bajo la dictadura y de violencia sistemática ocurrida a través de décadas y siglos contra los pueblos originarios, donde la nación cívico-institucional avasalló a la nación étnico-cultural²⁰.

Lo que hace que, en el caso mapuche, podamos estar ante una violencia ilegal e ilegítima para la nación cívica-institucional, pero que a los ojos de la nación étnica aparezca como una lucha legítima para reconquistar aquello de lo que fuera despojada. Este primer aspecto le da a las luchas mapuches de hoy un cariz distinto de las tomas de fundos de los sesenta y comienzos de los setenta en la que participaron las comunidades indígenas. Ello porque en esa época las tomas de tierra iban asociadas a la idea de la “tierra para el que la trabaja”, a proyectos políticos de cambio global y a una confianza en tales proyectos en que el Estado estaba comprometido. Hoy no se trata de una demanda campesina, sino ancestral, étnica, basada no en un principio económico social, sino que se funda en una rebeldía ante una injusticia histórica que se busca reparar. No es lucha por un pedazo de tierra para trabajar, sino de un territorio que les fue arrebatado por la fuerza o el engaño económico. Y esto se acompaña de una profunda desconfianza de la clase política y económica y de los militares y el Estado, considerados los principales culpables de la depredación que han sufrido.

Y por supuesto que la historia ha continuado y que sobre injusticias y despojos se construyeron nuevas realidades, algunas posteriormente legitimadas. Lo que hace más compleja la cuestión.

No parece haber otra solución posible que sea justa y estable sino una que abarque simultáneamente cuatro puntos. La primera es la devolución programada de amplios territorios al pueblo mapuche que busque compensar lo perdido, con lo que ello implica de garantías a

²⁰ R. Stavenhagen, **La cuestión étnica**. El Colegio de México 2001

derechos individuales de quienes sean afectados por tales devoluciones. La segunda es la autonomía política que consiste en una reforma constitucional que asegure un margen de autonomía en su gobierno a los pueblos originarios, con la elección de sus autoridades, respeto del pluralismo interno, órganos de representación y parlamento propio para determinado tipo de problemas y cuotas de participación en el Congreso nacional. La tercera es el desarrollo de las identidades y patrimonio cultural de los pueblos originarios, incluidos lengua, religión, costumbres y educación. La cuarta se refiere al problema que afecta a una enorme cantidad de población indígena que no vive en sus comunidades históricas, sino en ciudades y pueblos a lo largo del país. Políticas económicas, sociales y culturales focalizadas, participación en los órganos propios de debate y decisión políticas que se generen para estos pueblos, fórmulas de organización social propias, opciones de integración y preservación de identidades dirigidas a estos sectores, forman parte de una política integral respecto del problema indígena.

Se trata de buscar solución al más antiguo problema histórico pendiente, aceptando un proyecto de sociedad multinacional reconocida institucionalmente.

El modelo de crecimiento y desarrollo.

Es cierto que Chile se ha destacado en el último decenio entre sus pares latinoamericanos por ser una notable economía emergente de la región²¹. El desempeño económico ha estado principalmente impulsado por el aparato exportador y, en menor medida, por el consumo interno; habiéndose duplicado el PIB real en los últimos diez años, mediante vigorosas expansiones en el ingreso promedio y en el consumo. Actualmente, Chile tiene un PIB per cápita de casi cinco mil dólares anuales y un PBI real per cápita (ajustado por el poder adquisitivo) de US\$9.930. Tiene una esperanza de vida de 75.1 años, un nivel de alfabetización de 95.2%, y uno de los índices de Desarrollo Humanos (IDH) más altos de la región, alcanzando en 1998 el mayor IDH de América Latina. Al mismo tiempo, el país ha avanzado con fuerza en la agenda social, habiendo

²¹ Recordemos que la población del país superó los 15 millones de habitantes en el año 1999. Dos tercios de la población habitan entre la V y VIII regiones, incluyendo la región Metropolitana, con casi el 40% de los habitantes concentrados en Santiago. El fenómeno de urbanización de las últimas décadas ha culminado en un porcentaje de población urbana, estimado en 85,7% en el año 2000..

reducido la incidencia de la pobreza y la indigencia. La escolarización en Chile ha tenido avances importantes en la última década, con una media de escolaridad de un 9,3% a nivel nacional, lo que posibilita la generación de condiciones para alcanzar la meta de 15 años promedio para la totalidad de la población en etapa de escolarización, especialmente de los sectores rurales cuyo promedio es de 6,3 años. Respecto de la sustentabilidad ambiental, existen ciertos avances, particularmente en la institucionalidad y en los instrumentos de gestión ambiental disponibles, pero debido a que estos avances tienen lugar en forma paralela a las presiones económicas sobre el medio ambiente, no se han alcanzado niveles de calidad ambiental ni de recuperación del pasivo ambiental satisfactorios para los ciudadanos²².

Sin embargo, hay al menos tres grandes problemas en la dimensión socio-económica que de no remediarse, erosionarán no sólo el dinamismo del crecimiento, sino que pondrán en peligro los avances realizados y la existencia misma del país como comunidad en el plano social.

El primero de estos problemas se refiere al ritmo, tipo y metas del desarrollo económico. Se ha planteado la meta de ser un país desarrollado en el 2010. Pero no está claro si con el ritmo de crecimiento previsto, el que tampoco es seguro debido a cuestiones no siempre manejables de la economía mundial, que han llevado a bajar las expectativas drásticamente para los años 2001 y 2002, se podrá alcanzar esa meta. Más aún, ser un país desarrollado sería tener un nivel de vida como el de España hoy. Pero nada asegura que ese nivel de vida en diez años más sea suficiente para considerarse desarrollado.

Y es aquí, entonces, donde se plantea el problema de fondo. El modelo de crecimiento del mundo sobre la base del papel principal de las fuerzas transnacionales de mercado y de lo que se ha llamado la nueva economía, ha dejado de ser un modelo de desarrollo. Crecimiento y desarrollo ya no van de la mano y el problema estructural del empleo es la mejor ilustración al respecto, lo que exige intervenciones directas del Estado y la sociedad en la economía.

²² En su discurso en el Encuentro Nacional de la Empresa, el Presidente Lagos destacaba la alta ubicación de la economía chilena en los índices internacionales de libertad, competitividad, opacidad y corrupción. Ver Discurso del Presidente Lagos en ENADE, Santiago, Noviembre 2001

Es cierto que desde el Estado se han dado en el 2001 algunas señales interesantes que tocan ya sea a la preservación de los recursos del Estado o a la naturaleza de los fenómenos de desarrollo en el siglo XXI. Ejemplos de las primeras la ley de evasión tributaria, y de las segundas los proyectos de convertir al país en un centro para las nuevas tecnologías, así como la constante preocupación por los procesos de integración. Pero incluso en estos campos, ha habido permanentes contradicciones y ambigüedades, como lo es la ausencia de una reforma tributaria integral y su reemplazo por una fórmula que benefició principalmente a las grandes riquezas y que puso sólo una alza mínima a los muy bajos impuestos a las utilidades de las empresas. Así también como la ausencia de una intervención innovadora y de largo plazo del Estado, habiéndose ella retardado especialmente en el campo del empleo, las compras de armamentos que responden a presiones de las Fuerzas Armadas y que contradicen cualquier política de desarrollo, y las vacilaciones y oscilaciones respecto de la participación en bloques y acuerdos económicos internacionales, a lo que nos referiremos más adelante.

El debate abierto por el Presidente en su Mensaje del 21 de Mayo del 2000 sobre el tipo de economía y de sociedad del futuro no tuvo continuidad y no se fijaron en términos operativos los grandes temas de la agenda económica que no fueran los de la coyuntura inmediata. Asimismo, la discusión en torno a la naturaleza misma del modelo de crecimiento basado en exportaciones sin alto valor agregado y con una tasa desempleo que parece estructural, apenas ha tenido esbozos que muy luego son apagados, por cuanto en todos los ámbitos parece que las únicas voces que influyen y que fijan incluso la agenda de los organismos públicos son las de los grandes grupos y organismos empresariales, sus organizaciones gremiales y sus medios de comunicación.

Y éste es precisamente el segundo gran problema no resuelto por el modelo de socio-económico chileno, el de los actores del desarrollo. Por un lado, el país vive normalmente un permanente clima de guerrilla verbal y también de (in)actividad económica desatado por los sectores empresariales mencionados, con la amenaza que si no se aceptan exigencias en el plano político - como, en su momento, el término del juicio a Pinochet- o en el plano económico como la baja de impuestos o en el plano social como la ausencia de normativas de protección al mundo sindical, dejarán de invertir. Sin duda que hay excepciones, pero el nivel de ideologización y los intereses

desatados de ganancia a toda costa tan generalizados, hace que Chile no pueda contar con uno de los motores necesarios del desarrollo económico en el actual modelo de economía vigente en el mundo, como es una clase empresarial con responsabilidades, no frente ganancias a cualquier costo o a sus caprichos extra-económicos, sino frente al país, para lo cual necesita pensarse en términos de éste y del papel propio como agente de desarrollo en permanente cooperación y relación con el Estado.

Por otro lado, subsiste una cierta timidez respecto del papel más activo del Estado en su capacidad dirigente y movilizadora. Es cierto que en una economía altamente globalizada como la chilena en comparación, por ejemplo a los socios principales del Mercosur, se hace muy difícil la formulación de políticas económicas activas. Pero también es cierto que en lo referente al rol regulador e incentivador en la economía, protector en lo social, y promotor de áreas indispensables como la investigación o el medio ambiente, con la excepción de las obras públicas, el Estado está aún atrasado y presa de las auto-limitaciones que la ideología neo-liberal ha impuesto como sentido común. La misma modernización del Estado, aunque ha producido avances interesantes en la informatización y en los niveles de atención al usuario, no ha escapado a la perspectiva de medirse con los indicadores propios del mundo privado o del mercado. Reinstalar el papel dirigente, regulador y protector del Estado sigue siendo una tarea prioritaria, sin la cual no podrá resolverse el problema de las desigualdades a que haremos mención

El tercer problema se refiere a las consecuencias de la situación económica en el mundo social, las que han significado un relativo estancamiento, especialmente en lo referido al empleo, las igualdades socio-económicas y la capacidad de acción de los grupos y sectores sociales más afectados.

Respecto del empleo, aún cuando se han producido avances indudables como el seguro de desempleo y la creación de nuevos puestos por parte del Estado, sin que otra vez los empresarios hayan participado en ello, ya hemos señalado que la cuestión de fondo no ha sido abordada en sus términos reales y de futuro, sino que se ha quedado en mutuas recriminaciones sobre las responsabilidades de cada cual en la coyuntura inmediata. Y la cuestión de fondo, a la que apuntábamos más arriba, es que hoy el crecimiento ha dejado de ser equivalente a desarrollo,

integración social y, por lo tanto, en términos de la OIT “empleo decente para todos” y que, por lo tanto, deben introducirse ya sea modificaciones al modelo de crecimiento, ya sea acciones complementarias que pueden ser contradictorias con algunas de sus premisas o supuestos, de modo de volver a vincular crecimiento y desarrollo. Mientras esto no se haga, todas las soluciones serán parches y efímeras. Y no se ve que este debate, que se plantea en todas partes del mundo, y así puede hablarse del modelo alemán o del modelo nórdico o del modelo norteamericano, se haya instalado con seriedad en Chile, ni en el gobierno y la Concertación, con algunas salvedades, y mucho menos en la oposición empresarial y de derecha política. En este sentido, las reformas laborales aprobadas a mediados del 2001, pese a que fortalecen la posición laboral más allá de las concesiones que implicaron, sobre todo, de una visión coherente de lo que el trabajo representa en una sociedad que nunca fue plenamente industrial pero que ingresa con ese lastre al mundo post-industrial globalizado

En el pano de las desigualdades socio-económicas, hay que recordar que éste es el principal talón de Aquiles de la sociedad chilena, en la medida que la pobreza, al menos en la dimensión estadística, se ha reducido significativamente, como lo hemos indicado, en gran parte debido al crecimiento y a políticas sociales eficaces del Estado, pero en ningún caso debido propiamente a un proceso redistributivo. Si los pobres son hoy menos pobres, lo cierto es que los ricos son más ricos. Pese a la conciencia que éste es el principal problema que afecta al país como comunidad social, el debate dirigido por los sectores empresariales y por centros de investigación afines, divulgaron la tesis que “la pobreza no puede esperar y la igualdad sí” y que todo debía concentrarse en el crecimiento, que éste proveería igualdad y que no hay nada que hacer en esta materia porque perjudicaría la confianza²³. Este argumento también ha penetrado a ciertos sectores de gobierno que señalan que el tema de la igualdad es consecuencia del crecimiento y que es una discusión cuyo lujo sólo puede darse cuando se tengan tasas de crecimiento sostenido cercanas al 7%, es decir, probablemente nunca. Lo curioso es que desde ambos lados, quizás por razones distintas, se cae en argumentos totalmente reñidos con la realidad histórica, como lo es

²³ Ver K. Lehman y X. Hinzpeter **Los pobres no pueden esperar..., la desigualdad sí (los que más importan tienen la palabra)**” (Puntos de referencia, N°233, octubre 2000, y N°241 Mayo 2001, Centro de Estudios Públicos) y las respuestas de varios especialistas en el dossier **¿Puede la desigualdad esperar?** (Revista Rocinante, Marzo 2001)

afirmar una relación positiva entre desigualdad económica inicial y crecimiento económico, en el entendido que obtenido el segundo, viene el chorreo y se revierte la tendencia negativa original. Economistas no propiamente estadistas ni izquierdistas, han llamado la atención sobre este punto, haciendo ver que la relación es inversa a la que se predica: para que haya crecimiento debe haber mayores tasas de igualdad desde el comienzo. Negando o postergando la necesidad imperiosa de igualdad tanto para el desarrollo económico como para la subsistencia de un país como comunidad, se ha ido desplazando el eje central que distinguía la campaña y el proyecto del Presidente Lagos de todos los demás. No sólo del debate propiamente tal, sino de las medidas urgentes y necesarias en esta materia, como lo es principalmente la reforma tributaria.

Uno de los rasgos intrínsecos al modelo socio-económico de crecimiento es su capacidad de desestructurar toda forma de acción colectiva que no sea la de los poderes fácticos o corporativos empresariales. Cabe, en este plano reconocer que, tal como el modelo de desarrollo previo basado en la industrialización y el Estado tenía ciertos defectos intrínsecos que había que corregir desde fuera de él, éste también tiene perversiones que forman parte de su naturaleza. En efecto, el modelo económico predominante no favorece, como lo hacían la industrialización y el Estado en otras décadas, la creación de bases materiales e institucionales donde puedan constituirse actores sociales que organicen establemente las nuevas demandas. Al desestructurar la acción colectiva, se privilegia sólo la dimensión corporativa ligada al poder económico y se generan acciones defensivas esporádicas. A ello hay que agregar la ausencia de una institucionalidad adecuada tanto en el sentido de normas y regulaciones como de organización del Estado para procesar los conflictos y demandas. El caso de los temas medio ambientales es un ejemplo acuciante. Pero también lo son la descentralización, y los conflictos laborales donde las regulaciones y sistemas arbitrales son el resultado de la imposición dictatorial parcialmente corregidos durante el período democrático.

El descontrapeso entre organizaciones sociales, especialmente de los sectores más vulnerables, y los actores más poderosos que actúan en la economía, los poderes fácticos, no sólo parece no haber disminuído sino que se ha agudizado. Esto hace que los actores sociales debilitados, se vean obligados a poner como única tarea de su acción sus propios problemas particulares, con lo que disminuye su preocupación por las grandes cuestiones nacionales y aumenta su demanda

puramente corporativa, lo que se refuerza al no contar con un sistema partidario en el que los sectores sociales se sientan escuchados e incorporados por la clase política, con la excepción de la derecha que expresa directa y únicamente los intereses empresariales y militares, y del Partido Comunista, sin mayor proyección política, que suma cualquier descontento contra los gobiernos de la Concertación.

Todo lo anterior obliga a darle prioridad en el futuro a las tareas de regulación y control político y social del modelo económico. Ello implica el fortalecimiento tanto de actores sociales y políticos como de la institucionalidad estatal frente al mercado y poderes fácticos.

La transformación cultural²⁴.

.

Si pudiera hablarse de una orientación cultural prevaleciente en la sociedad chilena de los últimos veinte años, ella es la impunidad: la falta de responsabilidad para asumir los costos de lo que se hace y la seguridad que se puede hacer lo que se quiere sin que ello vaya a ser sancionado cuando se violan las normas morales y de convivencia. Sin duda que el origen de ello es la percepción que los grandes crímenes cometidos por quienes se tomaron el poder a sangre y fuego en 1973 no serán castigados. Por lo tanto, esta orientación irá declinando a medida que efectivamente se vaya terminando la impunidad de esos crímenes.

El modelo socio-económico vigente refuerza este principio de la impunidad a través del instrumentalismo, la motivación al éxito rápido, el individualismo como base de la acción y la desconfianza de las instituciones y acciones colectivas. Se tiende a promover una actitud de "ganar a toda costa". Mientras se gane, no se repara en los medios, y cuando se pierde, aunque se usen los mismos métodos que llevan a ganar o tener éxito, se castiga. Lo que se expresa también en el ventajismo ("a ver si pasa") por encima de la visión a largo plazo y de la capacidad de sacrificar un bien inmediato por otro más trascendente pero de más lenta consecución. Ello lleva a la carencia de profesionalismo y a la generalización del "masomenismo" y del carácter "aproximativo" del desempeño.

Por otro lado, la incorporación de valores de eficiencia instrumental para obtener lo que se quiere, para ser "emprendedor", como señalan algunos ideólogos, implica una co-existencia entre una capacidad de innovación frente a situaciones inmediatas y un alto nivel de conservantismo valórico más profundo de tipo atávico y reforzado por instituciones como la Iglesia, respecto de principios éticos y modelos de convivencia y comportamiento.

Finalmente, la tendencia contextual a la hipocresía, a no decir lo que se piensa, a adaptarse para sacar ventaja, teje un "tupido velo" sobre las cosas que nunca se llaman por su nombre. El mejor ejemplo de esta hipocresía institucional es la nulidad matrimonial, en que todos mienten alegremente

²⁴ Sobre estos temas, además de algunos de los textos citados en nota 18, ver M.A. Garretón,(editor) **Cultura y Desarrollo. Dimensiones y perspectivas en el cambio de siglo** (Editorial Andrés Bello, Santiago, 2001)

sabiendo que lo hacen, pero no se aprueba una ley de divorcio.

Todas estas orientaciones son promovidas por y funcionales al modelo socio-económico. Pero casi todas ellas son enteramente disfuncionales a una verdadera sociedad moderna y a la idea misma de una comunidad nacional que no se reduce al mercado, el consumo y las comunicaciones masivas. Es más, son contradictorias con la memoria histórica de una sociedad no exenta de mediocridad, pero que, como indicáramos, valoró la solidaridad y el esfuerzo colectivo. Y por ello no logran penetrar enteramente a los chilenos, conviviendo contradictoriamente con otro tipo de preocupaciones, como, entre otras, la búsqueda de la igualdad, la valoración de la educación para ser y no sólo para ganar dinero, la crítica al inmediatismo, el rechazo a una vida chata y sólo orientada por el cálculo del interés, la demanda de un Estado activo, la protección de identidades y del medio ambiente, la valoración y nostalgia de acciones colectivas, la búsqueda de un sentido más trascendente. Esta cara de la moneda hace que los mismos chilenos se rían del éxito que tan ufantemente proclamaron los que se identifican con una modernidad, bastante imitativa y ridícula, que han inventado para sí mismos.

Así, el rasgo principal es una fusión contradictoria entre estas diversas orientaciones valóricas como forma a la vez de adaptarse y de protegerse contra el avasallamiento del mercado, las comunicaciones y los poderes fácticos.

Y ello en parte se explica por un fenómeno al que ya hemos aludido. Si la política fue el cemento cultural de la sociedad chilena, hoy la política tiende a perder su centralidad en la construcción tanto de la identidad nacional como de las identidades particulares dentro de ella. Los diversos ámbitos o dimensiones de la sociedad se autonomizan, por lo que ya no puede hablarse de "un" alma nacional. O quizás el "alma" consista en la creciente diversidad y en los esfuerzos por no dejarse expropiar por la respuesta a la pregunta por el sentido.

Pero el sustrato o base propiamente cultural en otros ámbitos es muy débil. En la economía donde el crecimiento, el diletantismo y el consumismo reemplazan al desarrollo, el profesionalismo y la producción. En la pretensión de una modernidad "externa" y aparente que no asume su historia, no recorre una trayectoria y no acepta la creciente diversidad de modelos de modernidad existentes hoy

día en el país. En una "reconciliación" que no quiere reconocer culpas, negando o "cerrando" el pasado y buscando "dar vuelta la hoja".

Pero las sociedades se vengan de la banalización y la frivolidad. Los "modernos" no son capaces de hacer una ley de divorcio y quedan atrapados en una definición abstracta de la familia o piden que el Estado imponga autoritariamente los valores de algunos a toda la sociedad. La regionalización no encuentra institucionalidad que la respalde y la democracia local se caricaturiza en la legislación municipal. La democracia nacional no puede superar los enclaves autoritarios. La reducción del Estado no puede resolver los problemas de la educación, la salud y la pobreza. El mercado no reemplaza el antiguo rol de la política y los actores sociales no dejan de referirse al Estado. En lugar de una sociedad "moderna" surgen tres países yuxtapuestos: el de los integrados, el de los que logran integrarse vicaria o subordinadamente y el de los excluidos. Es decir, el de los que ya ganaron, el de los que ya perdieron y el de los que no pudieron siquiera competir.

Hay que reconocer que por la política y la economía pasa sólo una parte de las identidades personales y colectivas, y que ellas se juegan más hoy día en los sentidos de vida individual y social. Es en el modo de enfrentar estos problemas de sentido que se van a constituir principalmente las identidades, pero ello implica el debate sobre ellos y los espacios consiguientes, y no su mera adaptación a un determinado modelo económico. Y en esto el Estado y la política son insustituibles. Ya no como constructores únicos de identidades, sino generando los espacios en que ellas se construyen. En todos los ámbitos y espacios (familia, regiones, educación, etc.) ya no basta con la adaptación a modelos externos, a la que somos tan afectos. Es necesaria la creación. Sólo a través de la liberación de las capacidades de creación e innovación va a ir surgiendo la identidad nacional y las identidades colectivas diversas que la enriquecen. La identidad nacional no se define de una vez para siempre. Ella es siempre la combinación de tradición, respuesta coyuntural e imaginación prospectiva. Esta es la verdadera base material real de un proyecto nacional.

La sociedad chilena y la globalización: el Mercosur

Un quinto ámbito en que deben definirse nuevos consensos en la formulación de un proyecto nacional es el de la inserción del país en el proceso de globalización.

Es evidente que la sociedad chilena ha sido impactada por la globalización de una manera más fuerte que otras del continente, entre otras cosas por su propia dependencia histórica a los fenómenos externos en todos los planos, pero también por la naturaleza de su economía, más abierta que las otras, en parte porque la apertura y los ajustes se hicieron antes que la globalización se impusiera como el fenómeno central de fin de siglo²⁵. La discusión, entonces, no es globalizarse o no, lo que ya está ocurriendo independientemente de las voluntades, sino cómo controlar y orientar este proceso de modo que se limiten sus costos y el país lo aproveche como una oportunidad para su desarrollo no sólo económico, sino social y cultural.

A su vez el reconocimiento de la realidad ineluctable de la globalización, ha llevado a dos grandes visiones en esta materia. Por un lado, quienes piensan que Chile puede encarar este desafío sólo, para lo cual, dada la realidad de su economía ya globalizada en gran parte, debe buscar negociaciones convenientes con quienes sea y por su propia cuenta. Ello está en la base de las acciones encaminadas a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, con otros países de América Latina y con la Unión Europea. Por otra parte, hay quienes piensan que esta tarea no puede realizarse aisladamente y que hay que privilegiar la inserción en un bloque regional latinoamericano para desde ahí asumir en conjunto las tareas de globalización. Ello está en el origen de las posiciones que privilegian las negociaciones con el Mercosur. A favor de la primera posición y en contra de la segunda juega también un papel la cuestión arancelaria, en la que el sistema chileno aparece como incompatible con el de los países que tienen aranceles muy altos, entre otras cosas porque dependen mucho más de su mercado interno que la economía chilena. A favor de la segunda juega también un argumento económico y es que si hay países que son potenciales consumidores chilenos de mayor valor agregado, no es Estados Unidos, sino precisamente los del Mercosur²⁶.

²⁵ En materia económica, más de un 50% del PGB está vinculado al sector externo. En 1998, las exportaciones de bienes y servicios significaban 25,8% del PIB y las importaciones 29,7%

²⁶ Sobre el debate chileno en torno al Mercosur y las otras opciones de integración, ver, entre otros: **O. Rosales, Chile-Mercosur. Los pasos hacia la integración.** (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales . Ministerio de Relaciones Internacionales, Chile, Octubre 2000); Gobierno de Chile, Dirección General de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, **Negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio Chile-Estados Unidos** (DIRECON, Santiago, Enero 2001); Instituto de Estudios Internacionales, **Materiales del**

La posición oficial de Chile busca combinar ambas visiones, afirmando que se trata de buscar acuerdos de libre comercio con el mayor número de países, de ahí el privilegio a negociaciones por su cuenta con los Estados Unidos, Europa, Asia, determinados países de América Latina y de construir la integración, económica, política y cultural con el conjunto de América Latina, de ahí su participación, aunque no como miembro pleno, en Mercosur²⁷. Es evidente que se navega aquí en campos contradictorios, lo que puede afectar la viabilidad de la estrategia, - pese a que pueda ser conveniente o necesaria en el corto plazo-, en la medida que la pertenencia a uno genera obligaciones que limitan la acción respecto del otro.

En el fondo de estas opciones pueden apreciarse dos dimensiones diferentes sobre el problema, cada una de las cuales da origen a diversas posiciones en su interior.

Seminario Chile y los acuerdos comerciales: desafíos y oportunidades. Santiago, 17 Mayo 2001); G.W. Harrison, T.F. Rutherford, y D.G. Tarr, **Nafta, Mercosur and Additive Regionalism in Chile: A quantitative Evaluation.** (World Bank mimeo, 1997); C. Budnevich y R. Zahler, **Integración Financiera y coordinación macro-económica en el Mercosur** (Documento de Trabajo N°55, Banco Central de Chile, Diciembre 1999); G. Campero, **La cuestión laboral en el Mercosur.** (FES, Santiago, 1999); A. Mizala y P. Romaguera, **Aspectos laborales de la integración económica: Mercosur y Chile** (Serie Económica N°18, Centro de Economía Aplicada, Departamento Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, Abril, 1997); J. Ruiz Tagle, **Exclusión social en el mercado de trabajo en Mercosur y Chile.** (OIT, Santiago de Chile, 2000)

²⁷ Sobre el debate en torno al Mercosur, en general, ver Fundación OSDE, **Mercosur: el desafío posible y necesario** (Fundación OSDE, Septiembre 2000); Abreu, Laferrère, Ferré, Herrera Vegas, **¿Mercosur versus Alca?** (Archivos del Presente, Año 6, Número 23, Buenos Aires, Argentina, Enero-Marzo 2001); A. Di Filippo, **Globalización e integración en América Latina** (IHEAL, Paris, manuscrito, 2001); O. Sunkel, **Desarrollo e Integración: ¿otra oportunidad para una promesa incumplida?** (Revista de la CEPAL, Número Extraordinario, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 1998); M.I. Laredo (Coord.). **La integración latinoamericana en el actual escenario mundial: de la Alalce-Aladi al Mercosur.** (UNR Editora, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 1992); A. Di Filippo, **La crisis del Mercosur.** (en Foro Chile XXI, Año 1, N°3, junio Santiago, 2001). Sobre los aspectos económicos; R. Bouzas y J.M. Fanelli, eds, **Mercosur: integración y crecimiento** (Fundación OSDE, Buenos Aires 2001). Sobre los aspectos políticos: M. Hirst y R. Russel, **El Mercosur y los cambios en el sistema político internacional**, (Fundación OSDE, Argentina, 2001); Sobre los aspectos sociales: A. Di Filippo y R. Franco, **Aspectos sociales de la integración regional**, (en Aspectos sociales de la integración, Vol. I, Serie Políticas Sociales N° 14, CEPAL, Santiago de Chile, 1997) S. Draibe, **Mercosur. La Temática Social de la Integración desde la Perspectiva Institucional.** (Documento de Trabajo DT 17-10/96, CEFIR, 1996); L. Mármora y M. Cassarino, **La variable migratoria en el Mercosur.** (en Revista de la OIM sobre Migraciones Internacionales en América Latina, Vol. 17, N° 1, Santiago de Chile, 1999); N. Patarra, **Economic integration, labour market and international migration: The Mercosur case.** (presentado al the Seminar: International Migration towards the new millenium, Global and regional perspectives, University of Warwick, 1999). Sobre los aspectos culturales: G. Recondo, (comp) **Mercosur, la dimensión cultural de la integración** (Ediciones CICCUS, Buenos Aires, 1997); A. López y A. León **Comunicación para la integración del Mercosur** (CIESPAL-UNESCO, Quito, 1998)

La primera es la que se refiere fundamentalmente a la cuestión económica, donde juega un papel fundamental la situación estructural de la apertura y la política de comercio exterior. La segunda se refiere a una visión más compleja de la globalización donde se hace entrar en juego los factores sociales, políticos y culturales y la idea de bloques geo-económico-político-culturales en el mundo globalizado.,

La política de comercio internacional ha sido definida como una “pieza central” del desarrollo económico de Chile. Dado el tamaño relativamente pequeño del mercado interno, el potencial del crecimiento económico del país está directamente asociado a una aplicación exitosa del modelo exportador. Este postulado se basa en el hecho que un 50% del PGB está vinculado al sector externo, lo cual supera al 70% si incluimos al sector servicios.

Teniendo en cuenta la escasa incidencia de Chile en el comercio mundial (0.3%), la consiguiente dificultad de imponer sus puntos de vista unilateralmente, y la diversidad de mercados con los que mantiene intercambios económicos, el gobierno actual ha planteado que “es necesario negociar acuerdos que incluyan la mayor cantidad de temas y disciplinas comerciales con el conjunto de nuestros socios comerciales significativos. Sólo de esta manera, a través de una agregación de acuerdos comerciales, se podrá obtener un efecto de bienestar neto y neutralizar los potenciales efectos de desviación del comercio”²⁸.

En este contexto, los objetivos de la política internacional son: profundizar la inserción internacional, apertura y liberalización comercial, considerando exigencias de crecimiento y de equidad; combinar la inserción comercial con promoción y protección de inversiones; aprovechar las oportunidades de la globalización y minimizar sus riesgos; favorecer la competitividad y estimular el cambio tecnológico; cumplir con los compromisos internacionales contraídos²⁹.

²⁸ Seminario **Chile y los Acuerdos Comerciales...**op.cit.

²⁹ Ibid

Para realizar estos objetivos, se han usado tres instrumentos de la política comercial. Primero, la apertura internacional unilateral, considerada para un país pequeño una buena política, ya que contribuye a una asignación de recursos mas adecuados³⁰. El segundo instrumento son las negociaciones multilaterales, considerados convenientes ya que participan en él los principales países con que Chile comercia. En efecto, a juicio de las autoridades, una negociación en este ámbito representa una buena opción para el país, ya que se beneficia de las concesiones económicas que se intercambien entre sus miembros independientemente del tamaño y peso relativo y del nivel de desarrollo que ostenta. El tercer instrumento son los Acuerdos de Libre Comercio Bilaterales y Regionales. En la década de los noventa, en un contexto político-económico caracterizado por conflictos entre las potencias económicas, y la formación de bloques económicos excluyentes (Nafta, UE, Asia-Pacífico, Mercosur, etc.), Chile buscó una forma de proteger y profundizar el esquema de desarrollo adoptado en las últimas décadas, como complemento de su política de apertura unilateral, a través de los acuerdos económicos internacionales como complemento de su política de apertura unilateral, optando por una política activa de acuerdos regionales³¹ La aspiración de Chile es poder negociar acuerdos tipo TLC con la mayor parte de sus socios comerciales más importantes, con el objeto de acceder a

³⁰ La apertura unilateral aplicada por Chile a mediados de la década del 70, contribuyó al acelerado crecimiento de las exportaciones tanto tradicionales como no tradicionales, junto con estimular una mayor diversificación en términos de productos y mercados de destino. Los gobiernos de la Concertación no sólo han mantenido, sino que han profundizado esta apertura unilateral. Desde la inauguración democrática en marzo de 1990, la economía chilena ha emprendido una segunda etapa de internacionalización, en la cual se combinan la continuación de la apertura unilateral, con una activa política multilateral y de negociación de acuerdos comerciales. En 1991, el gobierno del presidente Aylwin redujo el arancel externo parejo del 15 al 11%. Simultáneamente inició la negociación de acuerdos bilaterales y subregionales en el hemisferio occidental. El Congreso aprobó en 1998 una nueva rebaja arancelaria progresiva de un 1% anual en los siguientes 5 años, con lo cual el arancel externo de Chile se habrá reducido al 6% en el año 2003. Esta es una medida relativamente audaz en un contexto internacional, en el cual se observa un cierto resurgimiento del proteccionismo, orientada a contribuir al incremento de los niveles de productividad y competitividad internacional. Adicionalmente, se ha profundizado la apertura del sector de telecomunicaciones, del sector financiero, de infraestructura pública y las privatizaciones, poniendo, así, un cierto énfasis en las áreas “no tradicionales” de la política comercial.

³¹ Chile ha negociado dos tipos diferentes de acuerdos comerciales, por una parte los denominados Acuerdos de Complementación Económica (ACE), firmados en el marco de la ALADI, referidos principalmente a temas arancelarios (Ecuador, Colombia, Venezuela, el actual acuerdo con el MERCOSUR). Por otra parte, se han negociado los Tratados de Libre Comercio (TLC), que además de la liberación arancelaria en materia de bienes incluyen los servicios, las inversiones, así como en algunos casos, las compras de gobierno, las normas para la aplicación de mecanismos antidumping y otras disciplinas comerciales y. también se han incluido acuerdos de cooperación laboral y ambiental. Chile ha suscrito TLCs con Canadá, México y Centroamérica y se está negociando actualmente con Corea del Sur y en el ALCA.

estos mercados en condiciones iguales o mejores que sus competidores y asegurar reglas del juego estables. y de contar con mecanismos institucionales para la solución de las controversias comerciales, ya que es fundamental para una economía pequeña contar con un respaldo claro en materia de normativas internacionales..

Actualmente, el intercambio comercial de Chile se divide en partes prácticamente equivalentes entre América Latina, América del Norte, Europa y Asia y se han suscrito acuerdos comerciales en todas esas regiones. De esta forma, es el único país de América Latina que ya ha negociado acuerdos comerciales con todos los países de la región, faltando en el hemisferio americano acuerdos sólo con los países del Caribe y EE.UU, esto último habiéndose acelerado significativamente después de los atentados terroristas en Nueva York y Washington en Septiembre de 2001. Hay también una activa participación en la APEC, foro que se ha revigorizado a partir de la superación de la crisis asiática y que es crucial en la actual etapa de incertidumbre respecto de los avances que se podrán concretar en el marco multilateral de la OMC. También en este marco se han legitimado los acuerdos comerciales bilaterales y subregionales y existe una multiplicidad de negociaciones entre varios de sus principales miembros (Australia, Nueva Zelandia, Singapur, Chile, Corea, Japón, México). Con la Unión Europea, se ha iniciado finalmente la fase técnica de las negociaciones comerciales y, a pesar de las reticencias europeas respecto de los ritmos y la amplitud y profundidad de la negociación, Chile aspira a lograr un tratado de libre comercio que incluya el conjunto de temas comerciales (esto es, inversión extranjera, aranceles, servicios), como lo implican los llamados “acuerdos de tercera generación”

En esta perspectiva, la política comercial chilena busca distinguir dos ámbitos: los acuerdos comerciales en los que priman las condiciones de mercado y los acuerdos comerciales donde primen consideraciones que no son de mercado (políticas, estratégicas, culturales). En el primer ámbito se apunta a negociar y maximizar las oportunidades comerciales con los principales socios comerciales muchos de los cuales son las economías mas prósperas y dinámicas a nivel global (Unión Europea, EE.UU., Corea, Japón, los países del ALCA) y, en el segundo ámbito, las negociaciones comerciales son parte de un esfuerzo nacional mayor, para alcanzar una

integración plena con los países vecinos. Pero se señala que sólo a través de una acción simultánea en ambos ámbitos, se pueden desplegar las potencialidades del desarrollo exportador de Chile³².

Es evidente que para Chile hay una doble prioridad que aparece como una tensión. Por una parte, el tratado con Estados Unidos, por otra, su presencia en Mercosur.

Cabe recordar que EE.UU es el primer socio comercial y principal inversionista extranjero en Chile. En este sentido algunas de las principales razones para negociar con Estados Unidos son mejorar las condiciones de ingreso de los productos chilenos a ese mercado, tener reglas claras, establecer mecanismos que permitan defender adecuadamente la posición de los chilenos que comercian los conflictos comerciales con ese país, lograr mecanismos definidos para la solución de conflictos comerciales, mejorar aún mas la clasificación de riesgo para Chile (que es la mejor de la región) y, por ende, atraer más inversiones y generar más empleo, incrementar la productividad de las empresas chilenas, facilitando la adquisición de tecnologías más modernas y a menores precios, incentivar y apoyar una mayor participación de Chile en la llamada “nueva economía” considerando que EE.UU. está a la vanguardia de esta nueva forma de hacer negocios. En el ámbito internacional se prevé que las negociaciones bilaterales con EE.UU., servirán también como un catalizador que dará vigor al proceso de liberalización hemisférica, tanto a escala bilateral como en el marco del Alca.

Ahora bien, las autoridades chilenas reconocen que el anuncio del inicio de las negociaciones

³² En este contexto, se adoptan las siguientes relaciones estratégicas: de integración con América Latina; de zona de libre comercio con el Hemisferio Americano; de asociación política y económica con la Unión Europea; de cooperación y liberación Comercial con la APEC; de promoción económica con mega mercados y otros países; de fortalecimiento del sistema multilateral con la Organización Mundial de Comercio. Así, respecto de los acuerdos que se suscriben, en los procesos de integración y asociación política y económica se busca incorporar y privilegiar las dimensiones institucionales, política, comercial, económica y de cooperación y, en particular, la incorporación de los ámbitos social y cultural; .en lo que se refiere a las zonas de libre comercio o de promoción económica, se propician acuerdos en el marco de las dimensiones comercial, económica e institucional; en los acuerdos de liberación comercial, las dimensiones son comercial, de cooperación e institucional. La postura actual del Ministerio de Relaciones Exteriores es que la profundización de los acuerdos suscritos se debe lograr, fundamentalmente a través del establecimiento de esquemas de Asociación Política, Económica y Social que abarquen los ámbitos político, comercial, económico, social, de cooperación e institucional. Se señala también, que en la medida de lo posible, dichos esquemas deberían completarse con el ámbito cultural.

comerciales con EE.UU y también con la Unión Europea. no ha dejado indiferentes a los socios del Mercosur. Pero Chile ha argumentado que, contrariamente a lo que ocurría a mediados de los años '90, el objetivo de esta negociación no es la incorporación al NAFTA sino que un TLC bilateral, tal como se ha negociado ya con Centroamérica, México y Canadá.³³ Pero, más allá de las ventajas económicas inmediatas y concededoras de los problemas que a sus socios del Mercosur ocasionan las negociaciones directas con EEUU, un importante argumento político para tales negociaciones es que la presencia de Chile en la sub-región de América del Norte puede ayudar al polo mexicano para evitar caer totalmente bajo la dependencia económica de EEUU y, por lo tanto, mantener vigente los lazos autónomos de México con América Latina y el Mercosur y, a su vez, la opción de la integración latinoamericana.

Respecto del Mercosur, la opción es ir a una integración plena en una gran variedad de campos (político, macro-económico, comercial, cultural, social y laboral, energético, entre otros), la cual sólo es posible entre países vecinos que comparten, en medida importante un enfoque político frente a la democracia, el desarrollo y la globalización. Es en este sentido que se señala que aquí la cuestión principal no es el libre comercio ni la unión aduanera, sino una integración de fondo y de horizonte amplio y que, por lo tanto, no cabe desgastarse en un debate acerca de si se debe priorizar un área geográfica o un socio comercial por sobre otro. Así, Chile se plantea un plan de trabajo para que incluye un amplio abanico de negociaciones bilaterales, subregionales y hemisféricas con el conjunto de los socios significativos para el país.

Lo cierto es que, desde que fue firmado el Tratado de Asunción, que dio origen al Mercosur, hay una posición en los gobiernos de Chile que busca que el país participe en este acuerdo; pero, las disparidades existentes entre los países miembros y Chile han impedido la plena integración. Los temas principales de controversia sobre la integración al Mercosur tienen que ver, por un lado, con la cuestión arancelaria, donde la estructura diferenciada del arancel del Mercosur y su promedio cercano al 15%, contrasta con el arancel parejo de Chile y cercano al 6%, por lo que elevar los aranceles a Chile no le conviene por la estructura de su economía exportadora y el MERCOSUR no está en condiciones de bajar tanto las tasas arancelarias. Por otro lado, para

³³ DIRECON, **Negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio...**op.cit

Chile es más fácil y eficaz negociar con terceros solo que integrado al Mercosur y esto es incompatible con las normas del Mercosur que obliga a sus miembros a negociaciones conjuntas. Además de estos dos aspectos especialmente sensibles en el último tiempo, se argumenta como dificultades adicionales la inconveniencia para Chile de modificar su política de protección a la agricultura tradicional, con lo que los otros países no desgravarían los productos industriales; las diferencias de institucionalidad económica; la dificultad de coordinación de políticas macroeconómicas; la ausencia de un mecanismo institucional de solución de controversias más allá de la diplomacia presidencial; los diversos enfoques de negociación entre Chile y los otros miembros, con tradiciones más de libre comercio en el caso chileno y más proteccionistas en el caso de los miembros de Mercosur, y con diferencias importantes en temas tales como servicios, inversiones, propiedad intelectual, anti-dumping, etc

Para las autoridades actuales del gobierno de Chile la verdadera integración se da entre países vecinos que además de los intereses económicos, comparten fronteras, valores y proyectos. Esta sería la razón del deseo de Chile de profundizar su inserción en el Mercosur, para lo cual en el corto plazo busca desarrollar una estrategia que comprende: asegurar la plena participación del Presidente de Chile en la reunión de Presidentes y la plena participación de Chile en el mecanismo de coordinación de políticas macroeconómica y en otras instancias del Mercosur; adoptar un mecanismo de seguimiento de la situación, proyectos y perspectivas del Mercosur; analizar la posibilidad de asumir los compromisos que los cuatro miembros del Mercosur han adoptado o vayan adoptando en el futuro, de modo de llevar adelante las vinculaciones “como si Chile fuera miembro del Mercosur” con la excepción de los referidos al arancel externo común y a las negociaciones económicas con terceros; mantener en estudio la posibilidad de adherir al Mercosur sobre la base que tal adhesión no quede condicionada a la aceptación de los compromisos sobre arancel y negociaciones con terceros ya mencionados y que el Mercosur supere su estado actual de “unión aduanera imperfecta”; analizar la posibilidad de proponer al Mercosur la profundización del acuerdo actual con el objeto de convertirlo en un acuerdo de asociación política, económica y social con instituciones estrictamente intergubernamentales.

Estos planteamientos fueron sintetizados en su discurso ante el Parlamento Argentino por el Presidente Ricardo Lagos en el sentido que si Mercosur se limitaba a un horizonte de unión

aduanera, quizás en muchos años más cuando la cuestión de aranceles se hubiera naturalmente resuelto, Chile se encontraría con los otros socios para formar tal unión aduanera. Pero que si se trata de ir a una verdadera integración económica, política, social y cultural, Chile estaba disponible para ello desde ahora.

Es evidente que no todos en la sociedad chilena comparten este punto de vista y que en el interior mismo de los gobiernos de la Concertación hay posiciones discrepantes, como hemos señalado, que privilegian la relación con los Estados Unidos y un Tratado de Libre Comercio con éste y el desarrollo del Alca, considerándolos incompatibles con el ingreso al Mercosur.

La política del gobierno de Chile de integrarse plenamente al Mercosur presupone que esta incorporación permitirá al país unir fuerzas con socios comerciales con los cuales se tienen afinidades significativas, lo cual potenciaría la capacidad negociadora con terceros mercados y en los foros internacionales. Hay sectores en el país que postulan que esta premisa podría ser cierta en materia política, de seguridad y otras áreas, pero que, de acuerdo a la experiencia de los negociadores económicos, no es aplicable a las negociaciones comerciales y, que, en materia económica, la integración plena al Mercosur podría llegar a ser un desastre.

El punto crucial es que las divergencias entre Chile y los otros países del Mercosur no son tanto un problema ideológico, sino de reflejo de estructuras productivas y orientaciones de desarrollo profundamente distintas que no se modificarán en el corto plazo: como hemos indicado, Chile ha basado su crecimiento en el aumento de las exportaciones mientras que en Argentina y Brasil el mercado interno es fundamental y las exportaciones son relativamente marginales. Asimismo, las divergencias internas en Chile respecto de las estrategias de tratado de libre comercio con EEUU y del ALCA versus la estrategia que privilegia el Cono Sur, reflejan también intereses y proyectos de inserción en la economía mundial que, aunque también relacionadas con posiciones ideológicas clásicas, no son reductibles a ellas.

Y ello nos lleva a la segunda dimensión de la inserción del país en el mundo globalizado, más allá de la problemática puramente económica. La cuestión de fondo está ligada a la naturaleza de la globalización. Lo más probable es que la inserción de los países en ella no se haga en forma

aislada, -lo que sólo podría lograr una gran potencia y aún así- sino que a través de la conformación de grandes bloques, no sólo económicos, sino, sobre todo político-culturales. Si es así, nuestra primera hipótesis es que América Latina debiera ser uno de ellos, lo que significa ir mucho más allá de acuerdos de libre comercio, significa pensar en una lógica de integración en todos los planos y aspirar a ser uno de los modelos de modernidad del mundo que se está formando³⁴.

A su vez, la integración, es decir, la conformación de un espacio económico, pero sobre todo político-cultural en el mundo globalizado no puede hacerse de la noche a la mañana y en forma mecánica y automática. Se trata de un proceso gradual en el tiempo pero también que necesariamente operará por parcialidades. Si se quiere que América Latina constituya un gran bloque en el proceso de globalización, es decir, que signifique un espacio de desarrollo económico común, pero también de desarrollo científico-tecnológico y de industrias culturales, de ciudadanía y sociedad civil fuerte, participativa y diversificada comunes, de interculturalidad, de una institucionalidad laboral y medio-ambiental compartida, etc. entonces hay que ir pensando en sub-espacios en que cada uno de estos aspectos vaya realizándose parcialmente y estableciendo lazos con otros sub-espacios. Nuestra segunda hipótesis, entonces, es que la conformación de un gran bloque económico-político-cultural latinoamericano se irá construyendo en torno a tres grandes ejes, más allá de las crisis que hoy puedan apreciarse. Uno es el eje mexicano-centroamericano. El otro es el configurado por los países andinos, que enfrenta la situación más problemática hoy en día. Y el tercero es el constituido por los países del Mercosur donde juega una posición preponderante Brasil. No tiene sentido de futuro pensar a Mercosur fuera de esta perspectiva.

Y por eso, tampoco puede reducirse la cuestión de la participación chilena en el Mercosur a las ventajas económicas de corto o mediano plazo ni compararlas con otras alternativas. Nuestra tercera hipótesis, es que Chile no tiene más alternativa que formar parte, junto con Argentina, del conjunto de países en que el polo aparece siendo Brasil, y esto hoy por hoy es el Mercosur. Su

³⁴ Ver M.A. Garretón, coord, **América Latina, un espacio cultural en el mundo globalizado** (Convenio Andrés Bello, Bogotá, 1999. Para lo que sigue ver la argumentación de A. Di Filippo, **Globalización e integración...op. cit**

rol no será jamás el de liderazgo, como pretenden ingenuamente algunos, pero sí puede ser crucial como bisagra entre estos tres polos: acercar México a América del Sur, interlocutar con los países andinos a los cuales ha estado históricamente ligado y jugar junto con Argentina y los otros países el rol necesario de contraparte al liderazgo brasilero.

Pensar la sociedad chilena, que hemos analizado en este trabajo, frente a la globalización es no sólo pensarla como economía o mercado, lo que también hay que hacer. Es pensarla en su inserción en América Latina, por lo que el paso que parece hoy necesario para ello es su presencia en el Mercosur. Las estrategias destinadas a ligar la economía chilena a otras áreas, pueden ser hoy necesarias, pero no debieran nunca desarrollarse al precio de dañar o hacer imposible a largo plazo el objetivo principal de constituir un bloque latinoamericano en el mundo globalizado.

CONCLUSIONES

La gran cuestión que enfrentan los países en el mundo globalizado de hoy es si podrán constituir un proyecto de país con el cual insertarse en este mundo y si lo podrán hacer junto con otros países constituyendo un bloque geo-cultural, un modelo de modernidad diversificado internamente.

Hemos intentado mostrar en este trabajo cómo se plantea esta problemática para el caso chileno.

Así, hemos indicado que Chile se constituyó como sociedad histórica, como comunidad política, en el siglo que termina, en torno a lo que podríamos llamar la matriz o proyecto estatal-democrático, nacional-popular y político-partidario, en ciernes desde los veinte y, más propiamente desplegado desde los treinta, y que conoció diversas etapas con predominio de diferentes versiones y expresiones, hasta los setenta..

Una de las principales características de esta sociedad era que economía, cultura y organización social estaban de algún modo fundidas en la política. Esta era el sello principal de las identidades colectivas y desde ella surgían las principales orientaciones de las subjetividades

individuales y grupales.. La política y, especialmente a diferencia de otras sociedades latinoamericanas, la política partidaria, era el principal cemento de la sociedad.: Ella permitía el acceso a los bienes y servicios que directa o indirectamente ofrecía el Estado, ` como la salud, la educación, el empleo, los créditos, etc . Pero, también, especialmente desde los sesenta, ella era la principal fuente de sentido para los proyectos individuales y colectivos:, el Estado era el referente de la acción colectiva, los proyectos de cualquier índole se construían fundamentalmente en torno a la política.. Esta forma de estructuración del país no estuvo exenta de problemas como la dependencia e inestabilidad de la economía, las exclusiones estructurales de campesinos y pobres urbanos hasta los sesenta, la polarización de la vida política y la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil y de sus manifestaciones culturales.

.Este tipo de sociedad , de modernidad latinoamericana y chilena, es la que se desestructura y transforma y de algún modo deja de existir como tal. Ello por efecto tanto de los procesos más genéricos de globalización, como de la implantación. de un contraproyecto cuyo objetivo era precisamente la destrucción del proyecto nacional-popular y su reemplazo por otro tipo de matriz, que fue lo que intentó la dictadura militar desde 1973. El enemigo contra el cual este régimen apuntó toda su fuerza y violencia era precisamente el mundo nacional popular, en cualquiera de sus expresiones políticas, culturales o sociales y su institucionalidad. democrática.

En una primera dimensión propiamente política, el proyecto autoritario-neoliberal mantiene la idea de nación y de sociedad, solo que esta nación está formada por enemigos y amigos, por gente a la cual hay que eliminar. Esta es una visión de país o de sociedad, que no puede ser sino represiva en la medida que apunta a enemigos internos que hay que eliminar. Pero junto a esta dimensión esencialmente militar y autoritaria, surge otra desde la economía y que penetra la sociedad, la cultura y la política, y que va en el sentido inverso a la idea de una sociedad o comunidad nacional: la sociedad es un espacio puramente económico, es un mercado al que se accede según los recursos y la población es simplemente un agregado de individuos consumidores: la sociedad no existe, el país es una ficción.. Este fue el doble proyecto que se intentó imponer contra la matriz nacional-popular -democrática.: Estado y política= represión; sociedad=mercado.

Este proyecto fue un rotundo fracaso en cuanto implantar una nueva matriz coherente y estable en reemplazo de la anterior. Pero, por un lado, logró dismantelar la matriz nacional popular y dejó al país sin un cemento, sin un principio de vertebración y unidad. Por otro, en la dimensión simbólica y ética, la doble vertiente -militar y neo-liberal- señalada, impuso, el principio de la impunidad, del “quien puede lo más puede lo menos” : De ahí el enorme valor moral que tuvieron la detención de Pinochet en Londres y su desafuero y declaración de reo en Chile al mostrar los límites de la impunidad si una sociedad quiere existir como tal. Asimismo, desde la economía, se impuso la idea que todo es competencia, que todo se rige por el mercado y que la vida consiste en ganar como sea a costa de los otros. La generalización de estos criterios éticos perversos, presentes hoy en la publicidad, en los llamados al éxito, en los medios de comunicación, en los comportamientos a nivel macro y micro de la sociedad., unido al primer fenómeno de dismantelamiento y desarticulación, tienen como consecuencia más grave, no sólo que se destruyó una determinada forma de convivencia e institucionalidad, un determinado proyecto nacional, sino que se deslegitimó la idea misma de un proyecto nacional, de reconstrucción de una comunidad o sociedad a partir de ciertos principios en torno a los cuales se organiza la sociedad, sus debates, luchas y conflictos.

El proceso de democratización política que se inicia con la derrota de la dictadura en el plebiscito de 1988 y se consolida con la inauguración del primer gobierno democrático en 1990, recuperó para el país la vigencia de las libertades públicas y la libre elección de los gobernantes, pero en un contexto de fuertes herencias institucionales y ético-simbólicas de la dictadura, así como de presencia de poderes fácticos militares y civiles que limitan la expresión de la voluntad popular. Pese a ello, el país ha mantenido una estabilidad y crecimiento económicos y ha logrado corregir algunas de las perversiones del modelo socio-económico heredado, sobre todo la disminución de la pobreza. Aunque no ha logrado reducir las desigualdades.

En los últimos años asistimos a procesos contradictorios de erosión de lo que quedaba de los componentes del proyecto nacional popular democrático, como por ejemplo la desaparición sociológica de la clase media y su reemplazo por un agregado de estratos o segmentos, o el reemplazo de los movimientos sociales por opinión pública, poderes fácticos o grupos de presión corporativa, y a procesos de recomposición de los jirones que mantienen viva aún la

idea de comunidad nacional, como es por ejemplo la recuperación democrática, pero ello con una institucionalidad que le quita relevancia y calidad y puede transformarla a la larga en una mera formalidad. Algunos celebran este cambio como modernización y mayor libertad de los individuos, sin reparar que se trata precisamente de una desmodernización de lo que ha sido la modernidad chilena y su reemplazo simplemente por la ley del más fuerte o del más oportunista.

El gran problema es, entonces, cómo se reconstituye la idea de una sociedad o comunidad política tanto frente a las transformaciones estructurales y culturales que provienen de los fenómenos de globalización, como a las herencias del proyecto militar y neo-liberal, lo que el regreso a una democracia incompleta no ha resuelto aún.

En un plano político hay cuatro cuestiones a enfrentar para resolver el problema central de Chile al entrar en el siglo XXI: la reconstrucción de una comunidad de país, o, en términos clásicos, de una polis o sociedad política: la reconciliación histórico-moral; la igualdad socio-económica, el papel del Estado y la política y la inserción en el espacio latinoamericano para responder a la globalización. ...

La cuestión de la reconciliación nacional se refiere básicamente a la reconstrucción de la unidad elemental y básica de una sociedad,- necesariamente diversa pero que apunta a cierto destino común aunque en debate y disputa por su sentido y dirección- cuyos desgarros la convirtieron en una suma de enemigos o de individuos y grupos que no se reconocen efectivamente como parte de un mismo país. No es posible reconstruir esta unidad mínima, cuestión no del pasado sino del futuro, sin el término de la impunidad y de la ley del más fuerte, sea éste individuo o poder fáctico. Y por eso la cuestión de la justicia, castigo y reparación por los crímenes, y las violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura militar con el apoyo de civiles, es decir, el acto institucional por el que se reconoce que ciertas cosas nunca debieron pasar y no volverán a ocurrir, son una condición sine qua non para que el país pueda tener futuro como tal. Y en este plano de reconciliación histórica, cabe también ubicar la cuestión mapuche y su integración como pueblo autónomo en un Estado multinacional.

La segunda cuestión que hay que enfrentar si se quiere reconstruir una comunidad nacional es,

la igualdad socio-económica, por un lado, y la diversidad socio-cultural, por otro. No hay que confundir el concepto de igualdad con el que se ha utilizado últimamente un poco como sustituto ideológico de aquél, aunque sin duda tiene su propia validez y legitimidad, cual es el de equidad que se refiere a igualdad de oportunidades individuales. Cuando hablamos de igualdad, nos referimos a la mínima distancia razonable, ética y posible entre categorías sociales: se trata que la distancia entre ricos y pobres, entre débiles y poderosos, no implique la existencia de más de un país en un mismo espacio territorial, como ocurre hoy. Sin igualdad socio-económica mínima, aunque con máxima diversidad cultural, no hay comunidad nacional. Esto significa que tal como la política económica requiere de indicadores medibles de crecimiento y de equilibrios macro-económicos, la política social exige también metas de igualdad socio-económica medibles año a año. Dicho de otra manera, la cuestión de la igualdad socio-económica y de la diversidad cultural, son la piedra angular de toda política social, cuyo fin es la producción no de bienes sino de sociedad y relaciones sociales. Pero la igualdad supone redistribución, la que no puede hacerse por métodos coercitivos o revolucionarios, sino a través de mayorías políticas y de una relegitimación y transformación profunda del Estado y de la política, lo que nos lleva a la tercera cuestión..

El Estado no podrá dejar de ser el principal agente de unidad, regulación, protección, integración y redistribución. Eso significa abandonar la monserga del anti-estatismo o de la reforma del Estado en términos de su puro tamaño, eficiencia o competitividad. Estas cuestiones de eficiencia y competitividad, así como del tamaño, sin duda importantes, son enteramente secundarias al lado de la cuestión central que es devolverle al Estado su rol dirigente, lo que significa que en muchas dimensiones habrá que aumentar sus recursos y tamaño. Por supuesto que el Estado deberá ser controlado por los sistemas de representación y de partidos, así como por la participación ciudadana.

Pero no se trata del puro aparato de Estado. Los temas de la unidad nacional, la igualdad social y la diversidad culturales, la restitución del papel dirigente del Estado, señalan la inversión de la tesis clásica de Aníbal Pinto, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Recordemos que él sostenía que en Chile se daba una atrofiada economía y muy débil desarrollo económico junto a un alto nivel de desarrollo socio-político institucional. Hemos señalado en este trabajo que la situación

hoy se presenta al revés: una economía dinámica, que se quiere moderna y competitiva, pero desamarrada y demasiado independiente de la sociedad y un pobrísimo sistema político institucional, partiendo por una Constitución impuesta y llena de enclaves no democráticos pero que abarca también la descentralización, las dimensiones laboral, medio-ambiental, cultural, educación superior y comunicaciones, por citar algunos ejemplos. En el plano político institucional, en el doble sentido normativo y organizacional, se requiere una profunda transformación democrática y modernizadora, no sólo en términos tecnocráticos, sino en el de una verdadera modernidad que permite la constitución de sujetos y actores en cada ámbito.

Lo cierto es que detrás de estas cuestiones está el gran tema de la relegitimación y mejoramiento de la calidad de la política. Este tiene una dimensión hacia el pasado que tiene que ver con la eliminación de los enclaves autoritarios y la reforma de la Constitución y una dimensión hacia el futuro que exige que la sociedad invierta en política: inscripción automática y voto obligatorio, financiamiento de partidos y campañas y control de gastos, elecciones primarias, por citar algunos ejemplos. Revalorizar y relegitimar la política, es una condición sine qua non para que el país deje de ser un agregado pretencioso de poderes fácticos e individuos, que no se reconoce en un pasado y que, por lo tanto, no tiene futuro como comunidad en un mundo globalizado.

La última cuestión se refiere a que no hay proyecto de país si no es en el marco de construcción de un espacio conformado por diferentes países que se proyectan en conjunto al mundo globalizado. Esta es la vocación de América Latina y en esta construcción el eje Mercosur juega un papel fundamental. Más allá de los cálculos económicos inmediatos, de las conveniencias de otras alianzas y negociaciones con otros bloques, no hay destino para Chile si no construye su proyecto de país en este contexto. Y su aporte propio será lo que ha sido siempre su única ventaja comparativa históricamente: una institucionalidad político democrática que aún le queda por construir.